▶ Actas 8B

Conferencia Internacional del Trabajo - 113.ª reunión, Ginebra, 2025

Fecha: 9 de julio de 2025

Sesión plenaria: Foro de la Coalición Mundial para la Justicia Social[1]

Índice

	Página
Apertura del Foro	3
Enfoque en intervenciones clave - Salarios vitales: un motor del desarrollo social y económico	8
Conversación entre los asociados - Fomentar una transición justa a través del diálogo social	12
Diálogo temático interactivo - Empoderar a la juventud para la justicia social	21
Enfoque en intervenciones clave - Prácticas empresariales responsables para sociedades inclusivas y sostenibles	23
Conversación entre los asociados - Economía basada en los derechos humanos	28
Diálogo temático interactivo - Liderando el cambio: IA para el impacto social	37
Clausura oficial	39

[1] Enlace al vídeo de la sesión: ILO Live - Foro anual de la Coalición Mundial para la Justicia Social.

Jueves, 12 de junio de 2025
Presidente: Sr. Moyo

Apertura del Foro[2]

- Alocución del Sr. Gilbert F. Houngbo, Director General de la OIT, Copresidente del Grupo de Coordinación
- Alocución del Sr. Luiz Marinho, Ministro de Trabajo del Brasil, Copresidente del Grupo de Coordinación
- Alocución del Sr. Roberto Suárez Santos, Secretario General, Organización Internacional de Empleadores (OIE)
- Alocución del Sr. Luc Triangle, Secretario General, Confederación Sindical Internacional (CSI)
- Alocución del Excmo. Sr. Luis Rodolfo Abinader Corona, Presidente Constitucional de la República Dominicana

El Presidente de la Conferencia declara abierto el Foro anual de la Coalición Mundial para la Justicia Social y da la bienvenida a los distinguidos invitados y participantes. Afirma que el Foro supone un punto de inflexión para el avance de la justicia social a escala mundial y, al mismo tiempo, representa una nueva fase de la Coalición como plataforma que promueve la acción, el diálogo y las intervenciones concretas lideradas por los asociados. Destaca la importancia que revisten la participación de los asociados, los diálogos temáticos y las contribuciones de los más de 350 participantes, y señala que el programa del Foro incluye debates de mesa redonda y conversaciones dirigidas por los asociados y moderadas por personalidades de reconocido prestigio. Subraya también el carácter inclusivo del Foro, que reúne a los asociados de la Coalición y a los delegados tripartitos de la Conferencia Internacional del Trabajo, y anima a todos a participar en él.

El Presidente invita a los asistentes a ver un vídeo sobre la Coalición.

El Sr. Houngbo da la bienvenida a los participantes y expresa su agradecimiento por el creciente impulso y respaldo con que cuenta la Coalición. Reconoce el desequilibrio de género existente en la tribuna de oradores, lo que recuerda que aún queda mucho por hacer para promover la justicia social, en tanto que responsabilidad compartida, en particular para alcanzar la plena participación de las mujeres. Al reflexionar sobre la evolución de la Coalición desde su creación en 2023, señala que esta ha experimentado un rápido crecimiento, tanto en tamaño como en contenido. La Coalición, que cuenta actualmente con unos 350 asociados, concita un amplio consenso sobre la necesidad urgente de promover la justicia social en un momento de incertidumbre a escala mundial. Hace hincapié en que la Coalición no debe circunscribirse a las actividades de promoción de dicho objetivo, sino también a la obtención resultados, y destaca que el Foro aborda la manera de pasar de la reflexión a la acción. A este respecto, el orador cita varios ejemplos concretos de progreso, entre ellos, el de un foro regional sobre prácticas empresariales responsables celebrado en la India, en el que se presentaron diez estudios de caso, y el de un proyecto piloto del Centro de Excelencia sobre Desigualdad del Congo, que permitió reunir a los interlocutores sociales y a representantes de

[2] Enlace al vídeo de la sesión: ILO Live - Sesión de apertura del Foro anual.

los organismos de las Naciones Unidas para llevar a cabo acciones coherentes y armonizadas. Señala además que 18 países han asumido el compromiso firme de incrementar las inversiones en empleo y protección social a través del Acelerador mundial del empleo y la protección social para transiciones justas. Da las gracias a los países que han prestado apoyo financiero y técnico, entre ellos Italia, Alemania, los Países Bajos, Suiza, Finlandia, el Japón y Francia, e indica que estas contribuciones han permitido realizar actividades en ámbitos clave como la productividad, el salario vital y el apoyo operacional a la secretaría de la Coalición. Asimismo, agradece el liderazgo ejercido por el Brasil y el Ministro Marinho, así como los esfuerzos desplegados por el Grupo de Coordinación de la Coalición para marcar el rumbo y mantener la buena marcha de las actividades. De cara al futuro, el orador subraya la necesidad de centrar los esfuerzos de la Coalición en los ámbitos prioritarios, en particular en lo relativo al impacto de la inteligencia artificial (IA). A este respecto, cita el último informe de la OIT sobre la IA generativa, en el que se señala que el 25 por ciento de los puestos de trabajo —ocupados mayoritariamente por mujeres— están en riesgo de desaparecer, lo que viene a corroborar que la consecución de la justicia social no solo incluye, sino que también trasciende, el mundo del trabajo. En este sentido, insta a adoptar con urgencia una estrategia de adaptación como respuesta a los retos y las oportunidades que plantean las nuevas tecnologías. Insiste en que la aspiración a la justicia social trasciende el mundo del trabajo y requiere un esfuerzo colectivo. Insta a fomentar el aprendizaje mutuo y la autorreflexión, en particular en el marco de los preparativos de la Segunda Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social y de la Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo, que se celebrará en Sevilla, con el fin de contribuir a la forja de un mundo mejor.

El Sr. Marinho, tras dar la bienvenida a los participantes en el segundo Foro anual de la Coalición Mundial para la Justicia Social, expresa su orgullo por el papel que desempeña el Brasil como copresidente del Grupo de Coordinación de la Coalición. Recuerda que la Coalición, en cuyo acto de presentación —celebrado el año anterior en la misma sala en la que tiene lugar el Foro— intervino el Presidente Lula, se creó con el objetivo de otorgar a la justicia social un lugar central en el desarrollo sostenible, no como un mero componente, sino como un pilar fundamental de la agenda mundial. Señala que la colaboración del Brasil se rige por cuatro principios básicos consistentes en: reformar la gobernanza económica para dar prioridad a un crecimiento inclusivo y sostenible; promover una participación inclusiva a través de la búsqueda conjunta de soluciones; armonizar los objetivos de las transiciones climática y laboral con la necesidad de crear empleo decente, y reafirmar el diálogo social como elemento esencial para generar consenso y garantizar la legitimidad. Tras insistir en que esos son los principios que guían la participación del Brasil en la Coalición, indica que, en 2025, la Coalición ha entrado en una nueva fase, y está pasando del planteamiento teórico a acciones concretas, con la puesta en práctica de intervenciones clave a nivel nacional, regional y mundial. El orador pone de relieve que en las últimas reuniones de la Coalición han intervenido activamente más de 500 participantes, lo que demuestra el amplio interés que esta ha concitado. Asimismo, señala que los procesos son intencionadamente inclusivos y flexibles. Invita a todos los asociados a que contribuyan a la Coalición aportando conocimientos técnicos especializados, movilizando recursos financieros, realizando actividades de promoción o compartiendo experiencias. Anuncia que los dos bancos públicos más importantes del Brasil, Caixa Econômica Federal y Banco do Brasil, se han unido a la Coalición, lo que demuestra el empeño del Gobierno de su país en obtener resultados tangibles que beneficien a las personas y a las comunidades. Hace hincapié en que participar en la Coalición es una opción voluntaria, pero a la vez representa un compromiso firme de apoyo mutuo y acción colectiva. Encomia el liderazgo ejercido por el Director General de la OIT, que ha movilizado a cientos de asociados con el objetivo de hacer realidad el mandato fundacional de la OIT de promover la paz

mediante la justicia social y el trabajo decente. En cuanto a la cuestión de los salarios decentes, señala que, aunque se han conseguido mejoras salariales reales, especialmente en los países en desarrollo, demasiados trabajadores siguen percibiendo remuneraciones inadecuadas. Los salarios decentes no son solo una cuestión de justicia, sino un motor clave del desarrollo. El Brasil, bajo el liderazgo del Presidente Lula, está impulsando políticas destinadas a incrementar el poder adquisitivo y reducir la pobreza y la desigualdad. Para concluir, el orador reafirma el compromiso del Brasil con el multilateralismo y desea a todos los participantes discusiones fructíferas.

El Sr. Suárez Santos reitera el firme apoyo de los empleadores al multilateralismo, las instituciones internacionales eficaces y la modernización de las alianzas, y explica que ese compromiso con la cooperación práctica es lo que ha llevado a la OIE a unirse a la Coalición. Subraya que, en tiempos de incertidumbre generalizada, de transformación tecnológica y de pérdida de confianza en las instituciones, es necesario contar con estructuras ágiles y con capacidad de reacción que estén próximas de las personas y respondan a sus necesidades reales. Expresa su sincero agradecimiento al Director General de la OIT, así como a todo su equipo —en particular a la Directora General Adjunta—, por haber hecho realidad la declaración de intenciones que acompañó a su candidatura al cargo que hoy ocupa, convirtiéndola en una iniciativa dinámica con un impulso cada vez mayor. Reconoce que, a pesar de las reservas iniciales expresadas por los empleadores con respecto a la Coalición, esta ha evolucionado hasta convertirse en una plataforma con un mayor grado de ambición y profesionalismo, y elogia las contribuciones realizadas por el Grupo de Coordinación, al que pertenece el miembro de la OIE de Malasia en calidad de copresidente. Subraya la necesidad de demostrar claramente el valor de la Coalición para la comunidad empresarial, en particular las pequeñas y medianas empresas (pymes), y enumera tres prioridades clave. En primer lugar, acoge con satisfacción las 14 intervenciones clave identificadas, destacando en particular el desarrollo de las competencias —sobre todo en relación con la IA y la transformación digital— como una de las principales prioridades. En segundo lugar, subraya la importancia de un programa sobre la productividad que contribuya a que los trabajadores salgan de la informalidad. En tercer lugar, pide que se redoblen los esfuerzos para promover la igualdad de oportunidades, mejorar el acceso a la financiación y asegurar la sostenibilidad de los sistemas de protección social. Reafirma la importancia crucial del diálogo social y subraya la necesidad de reforzar las capacidades institucionales de las organizaciones de empleadores y de trabajadores para asegurar una participación real. También señala los retos a los que se enfrentan las empresas en numerosos países debido a la debilidad de las instituciones y a una excesiva reglamentación, y declara que los entornos favorables son esenciales para la innovación, el crecimiento y la creación de empleo. Destaca que las empresas sostenibles son indispensables para lograr el trabajo decente y pide más apoyo para la iniciativa empresarial y el desarrollo de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas (mipymes). Tras reiterar la disposición de la OIE a contribuir con propuestas concretas, pone de relieve la participación de los empleadores en iniciativas como las relativas a los salarios vitales y las prácticas empresariales responsables. Insiste en que la Coalición no es una mesa de negociación, sino una plataforma para la colaboración y la obtención de resultados que, con el grado de ambición y el compromiso adecuados, pueda ofrecer soluciones a los retos mundiales a nivel de las empresas.

El Sr. Triangle expresa su apoyo firme y de principios a la Coalición, que ofrece una respuesta necesaria y urgente a las crisis interconectadas de nuestros días, provocadas por los conflictos armados, la emergencia climática, la inestabilidad geopolítica y el aumento de las desigualdades. Felicita al Director General de la OIT, al Presidente Lula, al Ministro Marinho y a todos los asociados por la puesta en marcha de esta iniciativa, y subraya que la justicia social

y la paz no son una cuestión opcional, sino la base del desarrollo sostenible y la prosperidad compartida. En un contexto de desigualdad económica, inseguridad alimentaria, reducción del espacio democrático y crecientes amenazas a los derechos humanos y laborales, especialmente para las mujeres, los niños y las comunidades marginadas, subraya la necesidad de emprender una acción mundial ambiciosa y coordinada. Reafirma el total compromiso del movimiento sindical mundial con la Coalición y enumera tres intervenciones prioritarias que la CSI está codirigiendo, y que consisten en: 1) promover una economía basada en los derechos humanos; 2) garantizar salarios vitales para todos, y 3) reforzar el diálogo social para una gobernanza eficaz. En cuanto a la cuestión de la economía basada en los derechos humanos, subraya la necesidad de hacer de los derechos laborales el eje central de la política económica e insta a reformar el comercio mundial, la inversión y los sistemas financieros con el fin de dejar de aplicar medidas de austeridad e invertir en servicios públicos, trabajo decente y cohesión social. Se refiere a la próxima Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo, que se celebrará en Sevilla, y a la Segunda Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social como eventos de gran importancia para dar nuevo impulso a este proceso. En cuanto al diálogo social, advierte contra la erosión de los derechos laborales provocada por la digitalización y el control algorítmico, y subraya la necesidad de proteger la negociación colectiva y la representación de los trabajadores. Insiste en que el diálogo social debe ser un pilar de la gobernanza democrática y eficaz. En cuanto a los salarios vitales, celebra las iniciativas emprendidas a nivel mundial al respecto y destaca la necesidad de promover la conformidad con las normas de la OIT, sobre la base de la negociación colectiva, los parámetros relativos al costo de la vida y la convergencia salarial a fin de evitar enfoques fragmentados. Insta a los Gobiernos y a los empleadores a que amplíen la cobertura del salario vital y aseguren remuneraciones decentes para todos. Para concluir, subraya que la Coalición ofrece un compromiso renovado con el multilateralismo y una respuesta justa a la inseguridad y la desigualdad mundiales. Afirma que el movimiento sindical está dispuesto a colaborar con todos los asociados para defender la democracia, promover la justicia social y lograr un cambio real a través de la acción colectiva.

El Excmo. Sr. Abinader Corona reafirma el compromiso firme y práctico de su Gobierno con la justicia social como base del desarrollo sostenible, la paz y la legitimidad democrática. En su calidad de represente de un país que sitúa la dignidad humana y la inclusión en el centro de sus políticas públicas, destaca que la justicia social no debe seguir siendo un ideal etéreo, sino que ha de traducirse en resultados tangibles: salarios que permitan vivir con dignidad, condiciones de trabajo seguras y saludables, y acceso universal a la protección social, a una educación de calidad y a oportunidades. Recalca que el derecho al trabajo es algo más que una cuestión económica: es una cuestión de dignidad, de identidad y de desarrollo colectivo. Hace un llamamiento a la unidad, el diálogo y el respeto mutuo como base para forjar la cohesión social. Se refiere a las reformas salariales que se han llevado a cabo recientemente en la República Dominicana y, a ese respecto, señala que el salario mínimo ha aumentado más de un 60 por ciento en términos nominales y casi un 25 por ciento en términos reales, y que ahora cubre una proporción muy considerable del costo de la canasta básica de productos. Menciona también otros logros en materia de desarrollo inclusivo, y señala, entre otras cosas, que se ha alcanzado la cifra récord de 5,1 millones de personas empleadas con empleo formal, con un 46,6 por ciento de los puestos de trabajo en el sector formal —la más alta de la historia del país— y que, por primera vez, la tasa de ocupación de mujeres en empleos formales ha superado el 50 por ciento. Explica que se está promoviendo la formalización con incentivos de apoyo, en el marco de un proceso en el que el Estado actúa como agente facilitador. Asimismo, hace referencia al amplio programa de política social adoptado por el Gobierno, que incluye la cobertura universal de salud, que alcanza ya al 97 por ciento de la población, y destaca las

importantes inversiones realizadas en materia de educación y formación profesional. La ampliación de las instituciones de formación técnica, los campus universitarios y las escuelas politécnicas está favoreciendo la empleabilidad y aumentando las oportunidades de cara al futuro. Gracias a todos estos esfuerzos, casi la mitad de la población ha pasado a formar parte de la clase media y los índices de pobreza y de pobreza extrema registran actualmente mínimos históricos. La República Dominicana reafirma su compromiso con las prioridades fundamentales de la Coalición, que son fortalecer el diálogo social, impulsar una transición justa hacia economías sostenibles, promover la responsabilidad empresarial e integrar los derechos humanos en los marcos de políticas económicas. Como muestra del firme compromiso de la República Dominicana con la cooperación regional, el orador señala que su país será sede de la próxima Reunión Regional de las Américas de la OIT. Para concluir, reitera que la justicia social no es solo un imperativo político y ético, sino una inversión estratégica en la paz duradera, la legitimidad democrática y la prosperidad compartida. Afirma que no hay mejor política económica que la de las personas que trabajan, y pide a los asociados que colaboren para que todas las personas tengan acceso a oportunidades, a los derechos y a una vida digna.

Enfoque en intervenciones clave - Salarios vitales: un motor del desarrollo social y económico[3]

Moderadora

- Sra. Sharanjit Leyl

Panelistas

- Sr. Firmin Ayessa, Ministro de Estado, Ministro de la Función Pública, Trabajo y Seguridad Social, República Democrática del Congo
- Sra. Yolanda Díaz Pérez, Vicepresidenta Segunda del Gobierno de España, Ministra de Trabajo y Economía Social
- Sra. Sonya Mohamed Abdulla Janahi, Vicepresidenta para Asia, Organización Internacional de Empleadores (OIE)
- Sr. Anselme Amoussou, Secretario General de la Confederación de Sindicatos Autónomos de Benín
- Dr. Jeremy Farrar, Director Ejecutivo, Director Científico, Organización Mundial de la Salud (OMS)
- Sra. Bettina Schaller, Vicepresidenta Superior, Directora de Asuntos Públicos, El Grupo Adecco

La moderadora abre el panel dando la bienvenida a los participantes y presentando el debate en el marco del Foro anual de la Coalición. Enmarca el tema de los salarios vitales como una de las 14 intervenciones clave de la Coalición y pone de relieve su importancia para el desarrollo inclusivo y la globalización justa. Destaca que en la sesión se expondrán iniciativas impulsadas por los asociados para aplicar los salarios vitales y con ello se ilustrará el enfoque intersectorial y práctico de la Coalición.

El Sr. Ayessa destaca la elección del Congo como país piloto en África para la intervención clave de la Coalición relacionada con las desigualdades. Hace hincapié en que el Congo está contribuyendo activamente mediante un Plan de Acción Nacional centrado en la justicia social, que se está ultimando, con medidas iniciales entre las que se incluyen el aumento del salario mínimo y la reducción de la disparidad salarial. A través de la recogida de datos y de encuestas se determinan los sectores con bajos salarios para orientar reformas encaminadas a promover la equidad salarial y la justicia social. Entre las reformas legislativas recientes está la adopción de un Código del Trabajo revisado y una escala salarial actualizada para el sector público que tienen en cuenta las condiciones reales de los trabajadores. La siguiente fase del Plan se centra en la reducción de la desigualdad en el acceso al empleo y al emprendimiento mediante el fortalecimiento del diálogo social y el aumento de la capacidad institucional, en particular en la inspección del trabajo. La estrategia se basa en dos pilares fundamentales. Primero, la mejora de las políticas y los programas públicos que promueven el trabajo decente y unos salarios justos en los sectores público y privado. Segundo, la ampliación de la protección social a todos los trabajadores, especialmente al más del 85 por ciento de la fuerza de trabajo que se concentra en la economía informal. Para que la reforma sea significativa es necesaria una

[3] Enlace al vídeo de la sesión: ILO Live - Enfoque en intervenciones clave - Salarios dignos: un motor del desarrollo social y económico.

gobernanza inclusiva y la participación de todas las partes interesadas. En el Congo, las decisiones se toman mediante un verdadero diálogo tripartito en el que participan el Gobierno, los empleadores y los trabajadores, con aportaciones adicionales de la sociedad civil y los asociados para el desarrollo. Este enfoque se está ampliando ahora a un modelo «tripartito plus» más extenso. El orador atribuye a la Coalición el mérito de ser una plataforma —técnica, institucional y diplomática— esencial para apoyar las agendas nacionales de justicia social. Desempeña un valioso papel a la hora de facilitar el aprendizaje entre pares y propiciar los contactos con asociados internacionales y financieros. El orador saca dos lecciones de los esfuerzos que está realizando el Congo: la importancia esencial de los datos sobre salarios y la necesidad de indexar los salarios al costo de la vida, pese a las dificultades. Para concluir, hace un llamamiento a actuar con audacia frente a la dificultad y reafirma el compromiso del Congo con la promoción de la justicia social a través de la cooperación, la ambición y la determinación colectiva.

La Sra. Díaz Pérez hace hincapié en que la experiencia de España demuestra que las políticas laborales progresistas, basadas en el diálogo social tripartito, pueden reducir la desigualdad y promover la justicia social. Afirma que la defensa del trabajo decente es esencial para construir sociedades más igualitarias, especialmente en un momento de creciente desigualdad. La decisión de España de elevar el salario mínimo legal un 61 por ciento en cinco años es una política fundamental que contribuye a reducir la desigualdad, alcanzar niveles de empleo sin precedentes —incluidas las mujeres— y aumentar la inclusión social. El salario mínimo demuestra ser una poderosa herramienta para luchar contra la pobreza de los ocupados, estimular la economía y elevar los salarios en general. La oradora explica que esta estrategia, sumada a las reformas laborales que promueven el empleo estable y las medidas de protección contra la crisis, ha apoyado el fuerte crecimiento económico y la cohesión social de España. Los resultados han sido, entre otros, una reducción del 22 por ciento de la disparidad salarial entre hombres y mujeres, aumentos salariales para los trabajadores con salarios bajos y beneficios específicos para los trabajadores jóvenes. La oradora describe el salario mínimo como la política feminista más eficaz de España, puesto que las mujeres —que se concentran más en sectores peor remunerados— son las que más se benefician. España también ha aplicado normas de transparencia, planes de igualdad obligatorios a nivel de empresas y una herramienta pública para evaluar el valor de los puestos de trabajo y detectar disparidades salariales injustificadas. La oradora pide que se imparta una mejor formación en negociación colectiva e insta a los empleadores y a los sindicatos a abordar la infravaloración sistémica de los puestos de trabajo que ocupan normalmente las mujeres, especialmente en el sector del cuidado y el sector social, un trabajo que es esencial pero que está persistentemente mal pagado. Describe a grandes rasgos cuatro medidas adicionales. En primer lugar, España insiste en que ningún trabajo debería crear pobreza; el trabajo decente debe sacar a la gente de ella. En segundo lugar, un comité de expertos apoya las decisiones relativas al salario mínimo con datos empíricos. En tercer lugar, los márgenes de beneficio de las empresas se comparten ahora en más de 5 000 mesas de negociación para apoyar negociaciones salariales fundamentadas. En cuarto lugar, España está reformando la legislación para vincular permanentemente el salario mínimo al 60 por ciento del salario mediano. La oradora concluye afirmando que la reducción de la desigualdad es una decisión política y una cuestión de derechos y elogia a la Coalición por ser una plataforma esencial para construir sociedades más justas y más inclusivas en las que nadie sea pobre trabajando.

El Sr. Amoussou recalca que el debate mundial actual sobre los salarios mínimos, decentes y vitales refleja un problema básico no resuelto en los mercados de trabajo, especialmente grave en el contexto africano. Muchos trabajadores africanos siguen en la pobreza pese a estar ocupados, mientras que los sindicatos a menudo carecen de

reconocimiento básico y de libertad sindical, lo que limita seriamente su capacidad para defender la justicia salarial. El orador destaca que es esencial empoderar a los sindicatos y señala que se les debe prestar apoyo para formar alianzas con la sociedad civil con miras a que actúen como un verdadero contrapeso al poder político y económico. Aunque los aumentos salariales son importantes, el orador sostiene que no son suficientes si la inflación supera a los ingresos. Pide un enfoque más amplio que incluya protección social, seguro de salud y otras prestaciones que mejoran los niveles de vida y reducen la dependencia salarial. Asimismo, destaca la necesidad de contar con datos fiables sobre las estructurales salariales, de los que a menudo no se dispone o que se eliminan cuando revelan verdades incómodas, como la disparidad salarial entre hombres y mujeres. Es necesario un diálogo social inclusivo y sincero, basado en el respeto mutuo y adaptado a las realidades nacionales. El orador advierte contra las soluciones de «corta y pega» que pasan por alto las dificultades locales, como el riesgo de que la automatización desplace a los trabajadores poco cualificados. Concluye que la justicia salarial exige una transformación estructural, indicadores sociales más sólidos y la ampliación de la protección social, sobre todo en las regiones dominadas por el empleo informal. Hace hincapié en que la justicia social debe considerarse no solo en términos de ingresos, sino como una cuestión de dignidad, inclusión e igualdad de oportunidades. Insta a los asociados de la Coalición a asumir un papel preponderante en el fortalecimiento de la cooperación, la amplificación de la voz de los trabajadores y el reequilibrio de poder en el diálogo tripartito a través de una participación respetuosa, basada en datos y responsable.

La Sra. Janahi, hablando en nombre de la OIE, expresa su firme apoyo al acuerdo tripartito sobre los salarios vitales alcanzado en febrero de 2024 con el apoyo de la OIT. Este consenso representa un importante paso adelante al aclarar dos principios esenciales: los salarios vitales deben cubrir las necesidades de los trabajadores y sus familias, y las políticas salariales deben garantizar la sostenibilidad empresarial teniendo en cuenta la productividad y las condiciones económicas. Para los empleadores, la aplicación de los salarios vitales es compleja y debe basarse en el diálogo social, datos precisos y la viabilidad práctica. También suscita preocupación el cálculo de los salarios vitales ligado a la productividad, y su aplicación sin poner en riesgo la supervivencia de las empresas, especialmente las pymes, que conforman más del 90 por ciento de las empresas a nivel mundial. La oradora subraya la necesidad de que la OIT desempeñe un papel esencial en la creación de un marco creíble, transparente y consensuado para los salarios vitales, y pide que se establezca un centro de datos sobre salarios que proporcione información a nivel nacional sobre las estructuras salariales, los costos de vida y las realidades económicas. Esto es crucial en aras de evitar un enfoque único para todos y de concebir soluciones inclusivas específicas para los distintos países. La oradora destaca también que la armonización y la coherencia son esenciales: las empresas ya están desbordadas por la fragmentación de las normas y las cargas relacionadas con su cumplimiento. Cualquier nueva norma sobre los salarios vitales debería aportar valor, no duplicar esfuerzos o sobrecargar a las empresas, sobre todo a las pymes. La agenda sobre el salario mínimo no debería transformarse en una herramienta de cumplimiento, sino en una plataforma colaborativa que apoye el diálogo, la cooperación y resultados equilibrados para todos. Por último, la oradora insiste en que la productividad debe crecer a la par que los salarios. Aumentar los salarios sin atajar problemas subyacentes —como la informalidad, los déficits de productividad o la falta de transparencia— menoscabará el objetivo del trabajo decente. La oradora concluye diciendo que el camino que debe seguirse es el diálogo social sostenido, el entendimiento mutuo y la formulación de políticas realistas y fundamentadas en datos que respeten la diversidad de contextos nacionales y capacidades empresariales.

El Dr. Farrar hace hincapié en la necesidad urgente de entablar una colaboración intersectorial para lograr la justicia social, señalando que sectores como la sanidad, la educación, los sistemas jurídicos, los derechos humanos y la igualdad de género tienen efectos amplificadores en la cohesión social. Destaca que la sanidad es fundamental para la justicia social, en particular en vista de la pandemia, que expuso profundas desigualdades dentro de los países y entre ellos. El orador pone de relieve la carga que suponen los costos de atención de la salud, especialmente los gastos directos y la contribución infravalorada de los cuidadores informales a menudo no remunerados —en su mayoría mujeres— cuyo papel debe reconocerse y apoyarse. Advierte de que el mundo está sufriendo alteraciones intensas, entre ellas cambios geopolíticos, cambios demográficos, efectos climáticos y transformaciones tecnológicas, que ponen en entredicho los modelos económicos y sociales existentes. Estas alteraciones exigen que se formulen políticas preventivas, no reactivas. El orador también llama la atención sobre la creciente desconfianza en las instituciones y la necesidad de que organizaciones como la OMS y la OIT revisen su papel y actúen con honestidad y humildad. Además, insta a la OIT a convocar una coalición de sectores amplificadores —entre ellos la sanidad y la educación— para crear de manera conjunta un contrato social renovado. La justicia social debe ser el eje de las estrategias de desarrollo, y la ciencia y los datos deben fundamentar la actuación. Para concluir, el orador pide a todos los participantes que traduzcan las palabras amables en compromisos concretos en los próximos 12 meses y reafirma la disposición de la OMS a colaborar en el marco de la Coalición para impulsar esta agenda.

La Sra. Schaller recalca el profundo compromiso de su empresa con unos salarios justos y decentes, señalando que paga a casi 2 millones de trabajadores en 60 países y considera la remuneración y el valor del trabajo fundamentales para su misión. Acoge con satisfacción la creciente atención que se está prestando a los salarios vitales no solo en las esferas políticas, sino también en los consejos de administración, las cadenas de suministro y entre los consumidores. Destaca la importancia del acuerdo tripartito de la OIT, en particular su definición clara de salario vital, que tiene en cuenta tanto las necesidades de los trabajadores como la sostenibilidad de las empresas, lo que permite a empresas como Adecco empezar a construir modelos internos congruentes. Señala que las estructuras salariales a menudo vienen determinadas por convenios colectivos, lo que hace esencial conocer las realidades locales. Además, empresas como El Grupo Adecco buscan en la OIT una referencia creíble y unificada para guiar la aplicación. La oradora pide que se establezcan sistemas de datos sólidos, incluido un centro de datos mundiales sobre salarios dirigido por la OIT y mejores estadísticas nacionales, con un mecanismo para reflejar los datos a nivel de empresas. Las expectativas deben ser realistas, especialmente en el caso de las pymes, y cualquier iniciativa mundial sobre los salarios vitales debe ser inclusiva y no prescriptiva y apoyar la sostenibilidad empresarial. La oradora subraya la importancia del diálogo social como herramienta primordial para asegurar resultados equilibrados. Los salarios vitales son ahora una prioridad estratégica para El Grupo Adecco, y la empresa se ha comprometido plenamente a avanzar en colaboración con su federación sectorial (la Confederación Mundial del Empleo), la OIE y los interlocutores sociales. La oradora concluye reafirmando la implicación de Adecco en la Coalición y tilda el momento actual de hito fundamental en un viaje de largo recorrido.

Conversación entre los asociados - Fomentar una transición justa a través del diálogo social[4]

Facilitadores/Introducción

- Sra. Celeste Drake, Directora General Adjunta, OIT
- Sr. Colin Jordan, Ministro de Trabajo, Seguridad Social y Sector Terciario, Barbados
- Sra. Sheena Mayers-Granville, Directora Ejecutiva, Confederación de Empleadores de Barbados
- Sr. Antônio Lisboa, Secretario de Relaciones Internacionales, Central Única dos Trabalhadores, Brasil (CUT Brasil)

Panelistas

- Sr. Luiz Marinho, Ministro de Trabajo y Empleo, Brasil
- Sra. Sandra Hassan, Viceministra de Trabajo, Canadá
- Sr. Andrés Romero Rodríguez, Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Costa Rica
- Sr. Yiannis Panayiotou, Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Chipre
- Sr. Muhammadu Maigari Dingyadi, Ministro de Trabajo y Empleo, Nigeria
- Sr. Chaudhary Nadeem Aslam, Secretario Federal, Ministerio de Pakistaníes en el Exterior y Desarrollo de Recursos Humanos, Pakistán
- Sr. Daniel Maurate Romero, Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Perú
- Sr. Bienvenido E. Laguesma, Secretario de Trabajo y Empleo, Filipinas
- Sr. Issam Lahmar, Ministro de Asuntos Sociales, Túnez
- Sr. Mohammad Ali Mohseni Bandpei, Viceministro de Asuntos Parlamentarios, Irán
- Sr. Andy Ellul, Secretario Parlamentario para el Diálogo Social, Malta
- Sr. Burak Akçapar, Embajador y Representante Permanente de la República de Türkiye ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra
- Sr. Oliver Röpke, Presidente, Comité Económico y Social Europeo (CESE)
- Sra. Miloushka Sboui-Racamy, Asesora Principal, Consejo Económico y Social de Curaçao y miembro del Consejo Directivo de la Asociación Internacional de Consejos Económicos y Sociales e Instituciones Similares (AICESIS)
- Sra. Linda Kromjong, Presidenta, amfori
- Sr. Giovanni Pagani, Jefe de Liderazgo Climático Inclusivo, C40 Cities
- Sr. Ed Pomfret, Director de Promoción y Campañas, Oxfam

La Sra. Drake presenta la Conversación entre los asociados como un paso crucial en la puesta en marcha de la Coalición Mundial para la Justicia Social, y destaca que la iniciativa ha avanzado de la fase de concepción a su aplicación práctica. Asimismo, subraya que los procesos de transición justa deben priorizar a las personas y sus derechos, velando por que estos sean inclusivos y estén fundamentados en el trabajo decente, la igualdad y la protección social. Tras

[4] Enlace al vídeo de la sesión: ILO Live - Conversación entre los asociados - Fomentar una transición justa a través del diálogo social.

recordar que la Coalición se creó con el fin de impulsar la aplicación de medidas concretas, insta a los asociados a servirse de esta plataforma para articular contribuciones específicas. En ese sentido, destaca la centralidad del diálogo social como herramienta para gestionar las transiciones de manera justa y eficaz, y observa que el tema de la reunión —la economía de los derechos humanos— refleja la necesidad de situar los derechos en el centro de la toma de decisiones económicas. Finalmente, invita a los asociados a predicar con el ejemplo y definir el rumbo futuro de la Coalición mediante cooperación y compromisos tangibles.

El Sr. Jordan subraya la importancia central de una transición justa para el desarrollo nacional de su país, dado su carácter de pequeño Estado insular en desarrollo con una economía abierta, una fuerte dependencia del turismo y una elevada exposición a los riesgos climáticos por su ubicación en la zona de huracanes del Atlántico. Su país concibe el objetivo de una transición justa no solo desde la perspectiva de la crisis climática —que en Barbados se considera una amenaza existencial—, sino también como respuesta al ritmo acelerado del progreso tecnológico. Ambos desafíos, que están estrechamente interconectados, tienen una importante incidencia en el empleo, los medios de vida y la estabilidad social. Con el fin de hacer frente a esos desafíos, Barbados ha adoptado la Declaración de la Misión Barbados, un marco nacional concebido para transformar el país en una sociedad sostenible, próspera e inclusiva. En dicha Declaración se establecen seis misiones, entre las cuales se destacan dos, a saber, combatir la degradación del medio ambiente —que se presenta como respuesta a un «planeta enfermo y en crisis»— y reducir la desigualdad digital y el atraso tecnológico. El Gobierno describe la situación de Barbados como un país analógico en el mundo digital del siglo XXI, lo que pone de relieve la urgencia de avanzar en el ámbito de la inclusión digital. Estas misiones han sido concebidas de forma colectiva gracias a una dinámica cultura de diálogo social que está muy arraigada en el país. Si bien no está prescrita por ley, la concertación social entre el Gobierno, los empleadores y los trabajadores constituye una práctica muy consolidada en Barbados. Todos los interlocutores sociales participaron en la determinación de los desafíos que enfrenta el país y en la formulación de las misiones, proceso que culminó el 1 de mayo de 2024 con la firma conjunta de la Declaración. El orador destaca que ni la acción climática ni la transformación tecnológica pueden prosperar sin una amplia colaboración pública, una firme confianza y un diálogo sincero e inclusivo. Asimismo, subraya que el modelo de concertación social ha permitido que Barbados movilice a su población y oriente sus esfuerzos nacionales en consonancia con los principios de una transición justa. El orador concluye reafirmando el pleno compromiso del país con la Coalición y la intención de Barbados de seguir colaborando activamente, junto con los demás asociados, para hacer frente a los desafíos mundiales compartidos y promover el objetivo de la justicia social para todos.

La Sra. Mayers-Granville subraya que la transición hacia economías ambientalmente sostenibles representa a la vez un reto capital y una oportunidad crucial. Tras reafirmar el papel central del diálogo social para lograr una transición justa, señala que no es una opción, sino una condición indispensable para una gobernanza inclusiva, un clima de confianza y resultados concretos que beneficien tanto a los trabajadores como a las empresas. La oradora destaca que la Coalición constituye una plataforma fundamental para avanzar en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) frente a desafíos mundiales como la pobreza y la informalidad, e insiste en que la acción climática debe ir de la mano de la justicia social y de un desarrollo empresarial sostenible. Desde la perspectiva de los empleadores, una transición exitosa requiere políticas claras, plazos realistas, inversión en innovación e infraestructuras y la activa participación de los interlocutores sociales en todas las etapas del proceso. En ese sentido, llama la atención sobre los déficits de gobernanza inclusiva, en particular en los diálogos nacionales sobre acción climática y en los mecanismos de financiación, en los que no se suele contar con los empleadores y los trabajadores. La

oradora recalca la necesidad de que ambos participen en las discusiones sobre las contribuciones determinadas a nivel nacional (CDN) y en las alianzas para una transición energética justa. Con respecto a los pequeños Estados insulares en desarrollo como Barbados, destaca los elevados riesgos que estos enfrentan ante las perturbaciones climáticas y su limitado margen de maniobra presupuestario. En tales contextos, las transiciones no deben representar una carga adicional para las microempresas y las pequeñas empresas, que ya enfrentan importantes limitaciones. Por el contrario, deben ser procesos habilitantes e inclusivos, que se apoyen en soluciones adaptadas y en la colaboración entre los sectores público y privado. Finalmente, destaca la importancia del programa de desarrollo de competencias para las transiciones ecológica y digital. Los empleadores están dispuestos a respaldar las iniciativas de recualificación, pero para ello se requieren estrategias nacionales sólidas y alianzas educativas que permitan atender las necesidades futuras del mercado de trabajo. La oradora concluye su intervención con un llamamiento a establecer marcos inclusivos que empoderen a los empleadores y a los trabajadores y que garanticen que nadie se quede atrás.

El Sr. Lisboa subraya que el mundo hace frente a una profunda inestabilidad —debido a conflictos armados y a la intensificación del cambio climático— y los primeros en sufrir las consecuencias de ello son los trabajadores más vulnerables, especialmente en el Sur Global. Ante esta realidad, el objetivo de lograr una transición justa debe ocupar un lugar central en las decisiones climáticas mundiales y ha de basarse en tres pilares interconectados, a saber, el trabajo decente, una transición energética equitativa y el derecho al desarrollo sostenible. El orador insta a abandonar los modelos económicos extractivistas en el Sur Global que se basan en la deforestación y la exportación de materias primas, incluidas las renovables, y que no generan beneficios para las poblaciones locales. Con demasiada frecuencia, la transición hacia una energía más limpia se produce a costa de los derechos de los trabajadores y en detrimento de la fortaleza sindical, en particular en el sector agrícola. El orador sostiene que la energía debe reconocerse como un derecho humano a fin de garantizar el acceso universal a esta, mediante modelos de producción redistribuidos que acerquen la oferta a la demanda. También destaca la necesidad de combatir la informalidad, fortalecer los sindicatos y velar por que los planes energéticos nacionales reflejen claramente los compromisos en favor de una transición justa. Ello requiere un diálogo social eficaz y una financiación sólida y accesible, en especial para los países vulnerables, que permitan llevar las políticas a la práctica. Tras reiterar la importancia central del trabajo decente en la gobernanza climática, el orador exhorta a todos los países a traducir sus compromisos políticos en medidas concretas. Por último, señala que el mundo se encuentra ante una encrucijada: o actuamos con decisión para hacer frente a los riesgos climáticos y sociales o dejamos que las generaciones futuras carguen con las consecuencias.

El Sr. Marinho destaca que la transición hacia economías locales y sostenibles representa una oportunidad histórica para generar empleos verdes, perfeccionar las competencias de la fuerza de trabajo y promover un modelo de desarrollo más inclusivo y resiliente. Bajo el liderazgo del Presidente Lula, el Brasil está decidido a lograr que esta transición sea justa, lo que significa que ningún trabajador se quede atrás, especialmente en los sectores con altos niveles de emisiones. Para ello, el Brasil está reforzando las políticas públicas centradas en la recualificación y recolocación de los trabajadores, a través de alianzas con universidades y centros de investigación. Estas iniciativas incluyen la formación en energías renovables, reforestación, agricultura sostenible y saneamiento, que son sectores con gran potencial para la creación de empleos verdes. El orador destaca, asimismo, el compromiso del Brasil con la promoción del diálogo social entre los Gobiernos, los trabajadores y los empleadores como pilar fundamental de una transición energética inclusiva. La seguridad y salud en el trabajo

también constituye una prioridad clave, especialmente ante el aumento de los riesgos relacionados con el clima, como el calor extremo y la contaminación. En este sentido, se están actualizando las normas para mejorar la protección de los trabajadores en los sectores más expuestos. El orador subraya el doble desafío que plantean el cambio climático y la transformación digital, frente a los cuales es necesario aplicar soluciones inclusivas y urgentes en materia de políticas. A tal efecto, propone cuatro líneas de actuación fundamentales: 1) analizar los efectos del cambio climático en el empleo y los ingresos de los grupos vulnerables; 2) formular políticas nacionales en favor de la justicia social que se centren en la recualificación y en los empleos verdes; 3) tejer alianzas para la financiación de iniciativas en la economía verde, y 4) reforzar la seguridad y salud en el trabajo en los sectores afectados por el cambio climático mediante la cooperación técnica internacional. La Coalición es una plataforma esencial para liderar una respuesta mundial socialmente justa al cambio climático. Por ello, el Brasil ha decidido participar activamente en ella. A este respecto, reitera su invitación a todos los asociados a participar en la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30), que se celebrará en Belém (Brasil) y constituirá una oportunidad clave para promover el diálogo y la adopción de medidas en favor de una transición justa y la financiación de la acción climática.

La Sra. Hassan destaca la importancia de las iniciativas colectivas y subraya que el éxito económico a largo plazo depende del establecimiento de condiciones de trabajo decentes y de la cooperación entre los trabajadores, los sindicatos y los empleadores. El Canadá ha creado un grupo consultivo dirigido por sindicatos para ayudar a los trabajadores —en particular, a los de los sectores en declive— a adquirir nuevas competencias acordes con las demandas del mercado de trabajo y a acceder a puestos de trabajo de calidad en una economía con bajas emisiones de carbono. El enfoque del Canadá prioriza a los grupos insuficientemente representados, incluidas las mujeres, en ámbitos con escasez de mano de obra. El aprendizaje permanente y las competencias básicas son esenciales para consolidar una fuerza de trabajo resiliente. Las consideraciones relativas al cambio climático se integran ahora en las políticas laborales, como demuestra la Ley de Empleos Sostenibles del Canadá, que propugna una transformación justa, inclusiva y sostenible de todos los sectores económicos. La oradora destaca la inversión realizada por el Canadá en formación para la adquisición de competencias y su compromiso en favor de lugares de trabajo seguros y saludables, lo que incluye mejorar la protección frente al estrés térmico por calor o frío y equipos de protección personal más adaptados para asegurar la inclusión. Por último, destaca el papel de un diálogo social auténtico e inclusivo en la configuración de un futuro del trabajo justo y decente, y reafirma el apoyo del Canadá a los esfuerzos por mejorar la vida de los trabajadores a través de la cooperación mundial.

El Sr. Laguesma afirma que, en Filipinas, el diálogo social es un componente de la política estatal consagrado en la Constitución y la legislación nacionales, que se aplica a través de mecanismos tripartitos nacionales, regionales y sectoriales. Dado que su país es vulnerable a las catástrofes naturales, la promoción de una transición justa es parte integrante del desarrollo y la justicia social, y debe comprender no solo las repercusiones climáticas, sino también la reestructuración económica y la transición hacia la tecnología verde. El orador destaca la Ley de Empleos Verdes de 2016 y el Plan de Desarrollo de los Recursos Humanos que la acompaña, los cuales están en consonancia con el marco de la OIT para una transición justa y se integran en las estrategias nacionales de desarrollo y empleo. Asimismo, presenta un enfoque que engloba al conjunto del Gobierno y de la sociedad, en el que participan los empleadores, los trabajadores, la sociedad civil y los organismos gubernamentales. Filipinas, uno de los países pioneros del Acelerador mundial de las Naciones Unidas, ha aplicado medidas de transición justa, como la prestación de apoyo a las mipymes para hacer frente a

los ajustes, la concesión de ayudas de emergencia al empleo y los medios de subsistencia y la ejecución de programas activos del mercado de trabajo. El orador reitera el firme compromiso de su país y su contribución a la Coalición.

El Sr. Romero Rodríguez destaca la diversidad de experiencias en el seno de la Coalición y su papel en la promoción de enseñanzas y prácticas de forma compartida, como plataforma fundamental para fomentar iniciativas que contribuyan al cumplimiento de las prioridades nacionales y a la justicia social mundial. Costa Rica, que alberga el 6 por ciento de la biodiversidad mundial, está comprometida con la preservación de sus recursos naturales, así como con la promoción de la democracia, la paz y la inclusión social. A pesar de los desafíos comunes a escala mundial, el orador subraya la obligación de las instituciones públicas de promover un desarrollo inclusivo, la protección del medio ambiente y la paz social; y explica cómo Costa Rica, a través del Consejo Superior del Trabajo, está ejecutando un ambicioso Programa de Trabajo Decente centrado en la promoción del empleo, la formación profesional, la inspección del trabajo y la reducción de la informalidad. El país está aplicando una estrategia de talento humano y una política nacional de empleo basada en el tripartismo. El orador expone las medidas adoptadas para impulsar una transición justa que favorezca los empleos verdes, las energías limpias y la construcción sostenible, así como los esfuerzos para incorporar la IA de forma que complemente las competencias humanas, en particular en la inspección del trabajo y los programas de empleo. Para concluir, reafirma el compromiso de Costa Rica y su voluntad de contribuir a la Coalición, y destaca la importancia de mantener un diálogo social sólido para alcanzar acuerdos que ofrezcan servicios accesibles y de calidad y mejoren las condiciones de vida de todos.

El Sr. Panayiotou elogia a la OIT por haber reunido a múltiples partes interesadas en una Coalición Mundial para promover la justicia social. Tras destacar la sólida tradición de diálogo social tripartito en Chipre, presenta un logro reciente: por primera vez desde su independencia, Chipre ha alcanzado una tasa de empleo del 80 por ciento y ha reducido el desempleo por debajo del 5 por ciento, por lo que ha alcanzado una situación de pleno empleo. El orador atribuye estos resultados a las iniciativas específicas para la recualificación y el perfeccionamiento de las competencias de los trabajadores, especialmente en materia de competencias verdes y digitales, donde la participación en iniciativas de aprendizaje se ha incrementado un 742 por ciento en dos años. Estos resultados han sido posibles gracias a una eficaz colaboración tripartita a través de la Autoridad de Desarrollo de los Recursos Humanos, en cuyo consejo figuran representantes del Estado, de los empleadores y de los trabajadores. Este diálogo institucionalizado ha hecho posible una colaboración en tiempo real, una toma de decisiones basada en datos y una planificación compartida. El orador destaca la importancia de mantener el compromiso con los valores y principios de la Coalición y expresa su optimismo ante la posibilidad de abordar los retos futuros mediante un diálogo social reforzado. Para concluir, indica que su Gobierno está dispuesto a contribuir a los esfuerzos clave de la Coalición en favor del diálogo social.

El Sr. Maigari Dingyadi describe el enfoque dual adoptado en Nigeria con respecto a la transición energética, que consiste en abandonar gradualmente los combustibles fósiles y expandir, al mismo tiempo, las energías renovables para favorecer la diversificación. Dado que el sector de la energía constituye la mayor fuente de emisiones en Nigeria, el Plan de Transición Energética de 2021 incluye una hoja de ruta basada en datos para llegar a cero emisiones netas en 2060, con reducciones específicas en los sectores de la energía, la cocina, el transporte y la industria. Habida cuenta de las implicaciones sociales, el orador subraya la importancia de asegurar una transición justa para los trabajadores y las comunidades afectados por este cambio. En ese sentido, hace referencia a las alianzas con la OIT, el Programa de las Naciones

Unidas para el Desarrollo y la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial a fin de elaborar un plan de acción para una transición justa, y la colaboración con la OIT para integrar la transición justa en las CDN revisadas de Nigeria. Asimismo, pone de relieve las previsiones según las cuales las políticas sobre la generación de energía podrían crear 12 millones de nuevos puestos de trabajo netos entre 2020 y 2035, además de oportunidades de empleo en los ámbitos de los sistemas de energía solar sin conexión a la red eléctrica, la cocina no contaminante y la reducción del metano. Los centros de formación profesional ya están dotando a los trabajadores —especialmente a los jóvenes— de competencias en materia de energías renovables y les prestan apoyo para trabajar por cuenta propia en ese ámbito. El orador destaca la necesidad de integrar a los jóvenes en la acción climática, ya que más del 60 por ciento de la población tiene menos de 25 años. Por último, señala que, en la nueva política nacional de empleo de Nigeria y en las CDN, se pone el acento en la importancia de una transición justa basada en el diálogo social y con un enfoque que incluya a toda la sociedad, en consonancia con los objetivos de la Coalición. De este modo, Nigeria se compromete a contribuir de forma decisiva a la iniciativa clave de la Coalición en favor de una transición justa.

El Sr. Aslam presenta la experiencia del Pakistán en la gestión de una transición energética justa y explica que, durante la crisis energética de 2010-2013, el país dependía de centrales eléctricas alimentadas con combustibles fósiles debido a las limitaciones tecnológicas y de costos de las energías renovables. Cuando mejoraron las condiciones, el Pakistán adoptó una política sobre energías renovables, puso en marcha su primera central de energía solar e introdujo un sistema de medición neta para apoyar las instalaciones de placas solares en los tejados. Gracias a este enfoque se ha llegado a una capacidad de producción de energía solar de 5 000 megavatios, en su mayor parte procedente de hogares e industrias. La energía hidroeléctrica se ha ampliado teniendo en cuenta a las comunidades mediante acuerdos negociados sobre la propiedad de las tierras e indemnizaciones. La propiedad pública de la mayoría de las centrales eléctricas alimentadas con combustibles fósiles permite su eliminación gradual y la reconversión y recolocación de sus trabajadores. El orador subraya la determinación del Pakistán de cumplir sus objetivos climáticos y su firme apoyo a la Coalición, destacando la disposición del país a contribuir activamente compartiendo su experiencia y velando por que las comunidades sigan ocupando un lugar central en la transición.

El Sr. Maurate Romero señala que la transición justa plantea un desafío en materia de inclusión, especialmente de los trabajadores que se encuentran en situación de pobreza, en la economía informal o que trabajan por cuenta propia. Por ello, el registro nacional de trabajadores en la economía informal es una herramienta clave para reforzar las políticas basadas en datos y orientar las intervenciones para ampliar la protección social. Tras destacar la existencia de 98 organismos de diálogo social, el orador reconoce la necesidad de reforzar el mandato institucional y la capacidad del consejo nacional tripartito. En ese sentido, pide a la OIT que establezca unas condiciones mínimas que faciliten un diálogo social eficaz, poniendo el acento en la necesidad de fortalecer su institucionalidad. Asimismo, se hace eco de las peticiones de que temas como el autoempleo y el diálogo social ocupen un lugar central en los debates de ámbito mundial para apoyar la formalidad y la creación de consenso. Por último, destaca la importante contribución del Gobierno del Perú a la Coalición mediante la organización de una conferencia internacional que reunió a una gran diversidad de interlocutores y dio lugar a la adopción de una Declaración Ministerial por la justicia social, suscrita por cuatro ministros.

El Sr. Lahmar explica que Túnez concede gran importancia al diálogo social como base para la paz social, el desarrollo y la justicia social; y recuerda que el diálogo social es una práctica profesional desde 1936 en Túnez, tanto en el sector público como en el privado, que ha propiciado aumentos salariales y la mejora de las condiciones de trabajo. El contrato social de 2013 institucionalizó el diálogo y, desde 2017, un mecanismo estructurado gestiona las consultas sobre cuestiones sociales y económicas para apoyar la estabilidad. El orador señala que Túnez utiliza indicadores de justicia social para orientar sus políticas y que ha contribuido al programa de la Coalición poniendo en marcha una nueva iniciativa piloto para mejorar los resultados medibles. Este proyecto adopta un enfoque cualitativo centrado en las personas y basado en cuatro pilares, a saber, los derechos humanos universales, una redistribución equitativa, la justicia social y una transición justa. El orador destaca que el pilar de la transición justa aborda las repercusiones de los grandes cambios mundiales —como la globalización, la evolución de la tecnología y el cambio climático— en el bienestar de las personas. Para llevar a cabo esta labor se ha creado un equipo piloto en el que participan la OIT, varios departamentos gubernamentales, los interlocutores sociales y la sociedad civil. El orador subraya que para que estas iniciativas sean efectivas se requiere un diálogo social responsable e inclusivo.

El Sr. Mohseni Bandpei da las gracias a la OIT y a los asociados de la Coalición por haber creado una plataforma que promueve la colaboración en torno a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y el Programa de Trabajo Decente; y destaca que el Irán ajusta sus prioridades nacionales a los objetivos de la Coalición, centrándose en reducir las desigualdades, reconocer los derechos laborales como derechos humanos y ampliar el acceso al empleo sostenible. El orador describe los esfuerzos de su país para combatir la discriminación, cerrar las brechas salariales y ampliar la protección social a grupos vulnerables, incluidas las mujeres, los jóvenes y la población de las zonas rurales. Asimismo, destaca la elaboración de una base de datos nacional sobre bienestar que permite prestar servicios sociales más adaptados y promueve un acceso equitativo, lo que contribuye a reducir las disparidades sociales. El orador señala los avances registrados en el ámbito del desarrollo humano, en particular, el aumento de la esperanza de vida, el acceso universal a los servicios de salud (incluido para migrantes) y una mayor seguridad alimentaria. Tras reafirmar el compromiso del Irán con las políticas de transición justa sobre la base de las directrices de la OIT, destacando la importancia del diálogo social, el desarrollo inclusivo y la renovación del contrato social para asegurar el acceso a los servicios públicos, el orador advierte que las sanciones injustas y las medidas coercitivas unilaterales han aumentado las desigualdades mediante la restricción del acceso al desarrollo y el trabajo decente. Por ello, insta a la OIT y a los asociados de la Coalición Mundial a que evalúen y aborden los efectos de esas medidas y apoyen las oportunidades equitativas. Por último, aboga por un futuro común basado en la igualdad, la dignidad y una prosperidad inclusiva.

El Sr. Ellul señala que, en Malta, el diálogo social no es considerado como una formalidad, sino como un modo de impulsar un cambio significativo y duradero. Asimismo, afirma que no se puede lograr una transición ecológica, digital o económica sostenible sin una participación equitativa de los trabajadores, los empleadores y la sociedad civil, y que una transición justa debe priorizar a las personas más vulnerables. En ese sentido, menciona algunos ejemplos nacionales, como la reforma legislativa —alcanzada en el marco de un diálogo estructurado— mediante la cual se ha introducido la presunción refutable de relación laboral para los trabajadores de plataformas, que les ofrece una protección de la que antes estaban excluidos. También destaca la nueva política familiar de Malta destinada a promover la conciliación de la vida laboral y personal y apoyar a las familias, así como la iniciativa más amplia denominada «Malta Vision 2050», que sitúa el bienestar humano en el centro del desarrollo sostenible. El

orador destaca que la prosperidad debe medirse en función de la dignidad, la equidad y la igualdad de oportunidades, y que una transición verdaderamente justa debe proteger a todas las personas, incluidos los niños en contextos frágiles y afectados por conflictos. Por último, reafirma el pleno compromiso de su país con la Coalición y con la promoción de políticas inclusivas y centradas en las personas mediante un diálogo social auténtico.

El Sr. Akçapar encomia a la Coalición por su liderazgo en la promoción de una respuesta mundial justa e inclusiva a los retos que plantea el cambio climático. Para Türkiye, la transición justa es una prioridad estratégica y representa una vía transformadora en la que convergen la justicia social, la racionalidad económica y la responsabilidad ambiental. El país ha adoptado medidas concretas, como la Estrategia de Empleo 2025-2028, que otorga a la transición justa un lugar central en el crecimiento inclusivo y sostenible, mediante el desarrollo de competencias verdes, la formación profesional y el fortalecimiento de la protección laboral. Con la colaboración de la OIT y de otros asociados, Türkiye está finalizando su primera estrategia nacional de transición justa, que incluirá la prestación de apoyo jurídico, institucional y financiero para los trabajadores y las empresas, especialmente en sectores y regiones vulnerables. También está actualizando sus CDN para que incluyan elementos más sólidos en materia de empleo y equidad, velando por que las ambiciones climáticas estén en consonancia con el objetivo del trabajo decente, a fin de crear no solo más puestos de trabajo, sino mejores, sobre la base de la dignidad, la seguridad y la sostenibilidad. Como miembro del Grupo de Coordinación de la Coalición, Türkiye ha expresado su interés en participar en la Junta Consultiva Internacional, que desempeña un papel clave en la transición justa. Tras afirmar que las estrategias de empleo inclusivo y el diálogo tripartito institucionalizado son fundamentales para el éxito de las políticas climáticas, el orador reafirma que Türkiye está dispuesta a colaborar en la construcción de una transición fundada en la solidaridad y el diálogo social, sin dejar a nadie atrás.

El Sr. Röpke explica que el CESE se sumó a la Coalición para reforzar su compromiso en favor del trabajo decente y las transiciones justas. Tras destacar que la transición justa no es solo una necesidad ambiental, sino un imperativo social, insta a que se integre en todas las políticas, tanto con respecto a la industria como a la agricultura o la digitalización. Asimismo, advierte que, sin un diálogo social significativo, las estrategias climáticas nacionales corren el riesgo de perder legitimidad y eficacia; e insta a la creación de comisiones de transición justa y a la formulación de una estrategia de financiación integral de la Unión Europea para apoyar un cambio transformador. Por último, reclama una gobernanza inclusiva a todos los niveles y reafirma la disposición del CESE de cooperar en el seno de la Coalición a fin de lograr transiciones basadas en los derechos y lideradas por la sociedad.

La Sra. Sboui-Racamy destaca que las políticas climáticas que excluyen a las personas más afectadas —esto es, los trabajadores, las comunidades y las pequeñas empresas— carecen de legitimidad y socavan la promesa de una transición justa. Se debe institucionalizar —y no simplemente alentar— el diálogo social mediante mandatos jurídicos, recursos y capacidad adecuados. Bajo la presidencia actual, la Asociación Internacional de Consejos Económicos y Sociales e Instituciones Similares se ha comprometido a aplicar tres medidas: integrar el diálogo social en los marcos climáticos nacionales, fortalecer la capacidad a través de programas especialmente adaptados y la colaboración con la OIT, y crear centros regionales para la coordinación tripartita en materia de protección social, recualificación y creación de empleo. Por último, aboga por transiciones inclusivas y dignas que no dejen a nadie atrás.

La Sra. Kromjong destaca la necesidad de traducir el diálogo social en medidas prácticas, especialmente en las cadenas mundiales de suministro. Como representante de amfori, explica que sus códigos de conducta en materia de normas sociales y ambientales —de conformidad con los principios de la OIT— brindan orientaciones sobre conducta empresarial responsable a más de 100 000 proveedores en más de 120 países. Dado que el desarrollo de capacidades es fundamental, ofrece formación gratuita a los proveedores para ayudarlos a entender y aplicar esas normas. La oradora subraya que, a pesar del desafío que supone, el diálogo social a nivel de empresa favorece una mayor resiliencia empresarial y produce mejores resultados para los trabajadores y las comunidades. Tras reconocer que pueden surgir problemas, destaca la importancia de hallar soluciones colaborativas mediante el diálogo entre empleadores y trabajadores, y entre compradores y proveedores. Por último, reafirma el compromiso de amfori con la Coalición y aboga en favor de soluciones prácticas compartidas y de la aplicación de un enfoque colaborativo en aras de un comercio sostenible.

El Sr. Pagani, hablando en nombre de C40 Cities, agradece la oportunidad de formar parte de la Coalición y destaca que una acción climática eficaz debe basarse en la justicia social y en un diálogo social sólido. El orador resalta el papel fundamental de las ciudades a fin de poner en práctica soluciones inclusivas, habida cuenta de su proximidad a las comunidades y su capacidad para convertir desafíos mundiales en acciones locales. En ese sentido, menciona los ejemplos de Ekurhuleni, Los Angeles y Accra, donde trabajadores, empresas y comunidades marginadas participan en iniciativas locales de transición justa, que han ayudado a ampliar la protección y a crear empleos verdes de calidad. El orador subraya la importancia que reviste la coordinación con los Gobiernos nacionales y expresa el compromiso de C40 Cities de apoyar a la Coalición mediante la promoción de estrategias de transición justa impulsadas a nivel local y la colaboración a todos los niveles.

El Sr. Pomfret reitera el firme apoyo de Oxfam a la Coalición y celebra el creciente impulso que está adquiriendo. Sobre la base de las conclusiones de los *Planes sobre el clima para las personas*, destaca que la mayoría de los planes climáticos nacionales aún no tienen verdaderamente en cuenta a las personas más afectadas —esto es, las mujeres, los pueblos indígenas, los trabajadores y las comunidades de bajos ingresos—, por lo que su participación es en gran medida simbólica. Por consiguiente, reclama procesos de participación temprana, transparente e inclusiva, sustentados en una financiación sostenible para asegurar la participación de la sociedad civil. Para lograr un verdadero diálogo social se necesitan condiciones propicias, como la libertad de expresión, los derechos sindicales y recursos públicos adecuados. Tras señalar que la justicia tiene cuatro grandes pilares, a saber, la justicia del reconocimiento, la justicia procesal, la justicia distributiva y la justicia restaurativa, el orador destaca la importancia de la financiación de la acción climática, las vías de reparación y la responsabilidad empresarial. La transición debe ser verdaderamente transformadora, no simplemente un cambio hacia energías renovables que descuide a los trabajadores y a las comunidades. El orador aboga por un replanteamiento de los sistemas económicos en torno a los cuidados, la equidad y la sostenibilidad, y reclama la solidaridad mundial para que se escuchen todas las voces a la hora de forjar un futuro justo.

Diálogo temático interactivo - Empoderar a la juventud para la justicia social

Oradores principales

- Sr. Felipe Paullier, Secretario General Adjunto para Asuntos de la Juventud, Oficina de las Naciones Unidas para la Juventud
- Sra. Mia Seppo, Subdirectora General, Nodo de Empleo y Protección Social, OIT
- Sra. Flora Chiper, Representante de la Juventud de Suiza ante las Naciones Unidas y las organizaciones internacionales
- Sra. Kathryn Rowan, Directora Ejecutiva, Red Mundial de Aprendizaje (GAN Global)
- Sra. Melissa Ansell-Bridges, Secretaria Nacional, Consejo de Sindicatos de Nueva Zelandia Te Kauae Kaimahi (NZCTU)
- Sr. Ruben Escalante Hasbun, Representante en Ginebra, Global Citizen

Este diálogo interactivo tiene por objeto explorar innovaciones y determinar prioridades comunes con miras a actividades futuras en el marco de la Iniciativa Global sobre Empleo Decente para los Jóvenes.

La Sra. Seppo da comienzo a la sesión reafirmando la ambición de la Coalición de integrar la voz de los jóvenes —especialmente de las comunidades marginadas— en los procesos de formulación de las políticas que configurarán el futuro del trabajo. La oradora aboga por un diálogo intergeneracional y compromisos específicos, y subraya que el éxito de la Iniciativa Global sobre Empleo Decente para los Jóvenes depende de una responsabilización compartida y de la consecución de resultados tangibles.

El Sr. Paullier, en calidad de coorganizador de la intervención clave de la Coalición sobre el empoderamiento de la juventud, destaca que se debe reconocer a los jóvenes como asociados y no como meros beneficiarios. Teniendo en cuenta que hay 1 900 millones de jóvenes en todo el mundo —la mayoría en el Sur Global—, el liderazgo de estos es crucial para hacer realidad la justicia social. Tras promover la armonización con la Estrategia de las Naciones Unidas para la Juventud (Juventud 2030), el orador insta a los participantes a que transformen sus ideas en contribuciones colectivas a la línea de trabajo de la Coalición relativa a los jóvenes.

Las aportaciones temáticas se estructuran en torno a tres pilares esenciales. **La Sra. Chiper** inicia la conversación hablando de las alianzas entre múltiples interesados, que ponen de manifiesto la importancia de colaborar de manera inclusiva con los jóvenes en todos los sectores y aprovechar las oportunidades existentes para conocer las perspectivas y las aspiraciones de la gente joven y actuar en consecuencia. **La Sra. Ansell-Bridges**, por su parte, aborda la creación de trabajo decente y el papel fundamental de las políticas macroeconómicas favorables al empleo. **La Sra. Rowan** destaca la necesidad de dotar a los jóvenes de competencias pensadas para el futuro y hace hincapié en las oportunidades que ofrecen los aprendizajes de calidad para conectar a los jóvenes con el empleo.

Durante los debates en grupo, los participantes resaltan que los jóvenes deben contribuir activamente a configurar los sistemas y las políticas de empleo. El lema «nada para nosotros sin nosotros» ejemplifica la exigencia e importancia de una participación sustantiva de los jóvenes para reforzar la aceptación, la pertinencia y la comunicación. En los debates se ponen de relieve los desafíos estructurales comunes, como la fragmentación de los marcos jurídicos, la debilidad de los sistemas de datos, la limitada capacidad de incrementar la escala de las iniciativas y las brechas existentes entre las aspiraciones de los jóvenes y las realidades del

mercado de trabajo. Los participantes señalan varios objetivos comunes, a saber, empoderar a los jóvenes vulnerables, formar a los líderes de la enseñanza secundaria en el trabajo decente y asegurar una mejor adecuación de las políticas de empleo a las prioridades de los jóvenes. Asimismo, se destaca la necesidad de formular políticas macroeconómicas que apoyen a los jóvenes e incrementar la visibilidad de los programas que han tenido éxito.

El diálogo se clausura con las intervenciones de **la Sra. Harwood-Whitcher** y **el Sr. Escalante Hasbun**. Se invita a los mandantes de la OIT y a los expertos en empleo juvenil a: i) integrar a los jóvenes líderes en la planificación de las políticas a largo plazo y asegurar una gobernanza y un diálogo social que incluyan a la gente joven y ii) aprovechar el impulso del próximo Foro Mundial sobre Empleo Juvenil, que se celebrará en diciembre de 2025 en la República de Corea, para avanzar en la consecución del programa de la Coalición y comprometerse a crear conjuntamente vías que permitan obtener resultados reales e inclusivos bajo los auspicios de la Iniciativa Global sobre Empleo Decente para los Jóvenes y la Estrategia de las Naciones Unidas para la Juventud. En sus conclusiones, **la Sra. Seppo** incide en que ha llegado el momento no solo de hablar de los jóvenes, sino de actuar con ellos, aprovechando su energía, su visión y su determinación de impulsar la justicia social.

Enfoque en intervenciones clave - Prácticas empresariales responsables para sociedades inclusivas y sostenibles[5]

Moderadora

- Sra. Sharanjit Leyl

Panelistas

- Sr. Mansukh Mandaviya, Ministro de Trabajo y Empleo, India
- Sra. Hélène Budliger Artieda, Secretaria de Estado de Asuntos Económicos, Suiza
- Datuk Dr. Syed Hussain Syed Husman, Presidente, Federación de Empleadores de Malasia (MEF)
- Sra. Martha Molema, Presidenta, Federación de Sindicatos de Botswana (BFTU)
- Sra. Rebeca Grynspan, Secretaria General, Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD)
- Sr. Nathan Sussman, Director, Centro de Finanzas y Desarrollo, Instituto de Estudios Internacionales y de Desarrollo de Ginebra
- Sr. Lucas Szabo, Gerente de Asuntos Públicos Globales, Nestlé

La moderadora presenta la sesión como una oportunidad para fomentar la comprensión de los temas básicos de la Coalición Mundial, haciendo hincapié en que el Foro constituye un momento decisivo para que la Coalición no se limite solo a la visión sino que apunte también a la acción. La sesión se centra en la conducta empresarial responsable y en las inversiones sostenibles, intervenciones esenciales de la Coalición que reflejan su carácter transversal y multilateral. Se ha diseñado para poner de relieve la ayuda que la Coalición brinda a los asociados al objeto de que pongan en sintonía sus esfuerzos y amplíen la repercusión, al reunir a diversos sectores en el marco de un compromiso común con la justicia social.

El Sr. Mandaviya hace hincapié en que el desarrollo sostenible y la justicia social deben basarse en los derechos humanos y adaptarse al contexto específico de cada país. Reflexionando sobre la trayectoria de la India, señala su inmensa diversidad y su población de 1 400 millones de habitantes como un reto y un principio rector. En un contexto de esas características, una seguridad social continua y la igualdad son esenciales. Pone de manifiesto la importancia de capacitar a los grupos de bajos ingresos y de perfeccionar sus competencias, y pide a las industrias que se responsabilicen del bienestar de los trabajadores, incluidos el trabajo decente y los servicios de salud. Como resultado, señala, la India ha experimentado un aumento de la empleabilidad, un crecimiento económico anual constante del 6 al 7 por ciento y un aumento del poder adquisitivo. La cobertura de la seguridad social ha pasado del 19 por ciento en 2015 al 60 por ciento en 2025, y actualmente llega a 994 millones de personas, logro que ha sido posible gracias al Gobierno central y los Gobiernos estatales. Aunque los objetivos de desarrollo son de carácter mundial, subraya, cada país necesita su propio modelo. Las diversas regiones de la India —con climas y recursos distintos— necesitan enfoques localizados. Explica que las inversiones en industrias intensivas en mano de obra conducen de forma natural a la producción, el desarrollo y la creación de empleo, lo que describe como una

[5] Enlace al vídeo de la sesión: ILO Live - Enfoque en intervenciones clave - Prácticas empresariales responsables para sociedades inclusivas y sostenibles.

verdadera inversión sostenible. En cuanto a la tecnología, reconoce los temores en torno a la IA, pero afirma que el reto reside en cómo se utiliza. Al igual que el sector de la tecnología de la información, que al principio se veía como una amenaza para el empleo pero acabó siendo una fuente de empleo y progreso, la IA puede aportar beneficios si se aplica de forma responsable. Para concluir, subraya que el trabajo debe ser el eje central del desarrollo. El esfuerzo y la dignidad de los trabajadores construyen la economía. Garantizar sus derechos, una remuneración justa y su bienestar debe ser un objetivo común, independientemente de que cada país encuentre su propio camino.

La Sra. Budliger Artieda explica que Suiza, en cuanto confederación liberal y descentralizada, se basa en un enfoque ascendente. El Gobierno confía en que su sector privado adopte los principios ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) para garantizar el futuro de las empresas, y muchas multinacionales suizas así lo han hecho. Esta labor está respaldada por el Plan de acción nacional sobre empresas y derechos humanos, ya en su tercera edición, elaborado en colaboración con la sociedad civil, los sindicatos y las empresas. A modo de ejemplo, Suiza gestiona el 50 por ciento del comercio mundial de café. Reconociendo esta responsabilidad, el Gobierno puso en marcha una plataforma cafetera multilateral para apoyar a los productores de los países de origen. La financiación pública inicial ayudó a poner en marcha la iniciativa, pero el sector privado pronto asumió el liderazgo, lo que permitió al Gobierno dar un paso al lado. Ahora se está reproduciendo el mismo modelo para el cacao. Suiza, señala, es un país de 9 millones de habitantes, pero figura entre las 20 mayores economías, en gran parte debido a la inversión extranjera directa (IED). Se confía en que las empresas suizas respeten las normas suizas en el extranjero. La oradora destaca dos iniciativas de IED. En primer lugar, durante las conversaciones comerciales con la India, se propuso la IED como beneficio mutuo. En respuesta, las empresas suizas prometieron 100 000 millones de dólares de los Estados Unidos en IED a lo largo de 15 años, ligados a la creación de 1 millón de puestos de trabajo de calidad que requerían competencias y formación, lo que refleja el sólido sistema de formación profesional suizo. La segunda iniciativa se centra en Ucrania. Junto a la ayuda humanitaria, Suiza alienta a las empresas a invertir directamente para crear puestos de trabajo para los ucranianos, incluso durante el conflicto. Para apoyar esta iniciativa, el Gobierno ofrece algunos incentivos financieros, medida poco habitual en Suiza. Estos empleos pretenden generar ingresos, consumo e impuestos, ayudando a la recuperación de Ucrania. Para terminar, la oradora dice que la expansión de los mercados extranjeros también beneficia a Suiza. Cuando la gente prospera, puede comprar productos suizos, y dado que Suiza compite en calidad, la prosperidad mundial redunda en interés de todos.

La Sra. Molema afirma que una conducta empresarial responsable comienza con un compromiso con los derechos humanos, subrayando que los derechos de los trabajadores son derechos humanos. Los salarios decentes, la salud, la vivienda y unos medios de vida seguros son esenciales. Los sindicatos son fundamentales para educar a los trabajadores sobre sus derechos, que a menudo son vulnerados sin su conocimiento. La oradora subraya que se necesitan leyes aplicables, especialmente para las empresas multinacionales y sus cadenas de suministro, que a menudo descuidan la dimensión social. En Botswana, los sindicatos utilizan una aplicación para que los trabajadores puedan notificar las quejas y poner en contacto a los trabajadores con asesoramiento de expertos, ayudándoles a actuar sin miedo ante la intimidación. La oradora describe distintas prácticas de explotación, como largas jornadas laborales, salarios bajos y contratos fragmentados que impiden acceder a las prestaciones de largo plazo. Dado que los jóvenes constituyen el 70 por ciento de la población de África Meridional, la oradora advierte contra el aumento del empleo precario y la pobreza laboral. Los sindicatos, afirma, seguirán presionando a los Gobiernos para que defiendan los derechos

laborales a través del diálogo tripartito. Subraya la necesidad de que los trabajadores comprendan los marcos mundiales como los que brinda la OIT, y puso el ejemplo de los fondos de pensiones. Esos fondos son dinero de los trabajadores, pero estos a menudo no son conscientes de ello o están infrarrepresentados en la gobernanza, y los fondos pueden ser mal utilizados, por ejemplo, para financiar flujos financieros ilícitos o empresas no sostenibles. Los sindicatos deben propugnar la transparencia, una mayor representación en la gobernanza de los fondos y la inclusión de criterios sociales —como salarios decentes y seguridad en el lugar de trabajo— en las decisiones de inversión. Los principios ASG deben ser efectivos, no simbólicos. Para concluir, la oradora pide reformas urgentes para garantizar la justicia, la transparencia y la rendición de cuentas.

El Dr. Syed Husman presenta la MEF, que representa a 70 000 empleadores y a 6 millones de trabajadores —el 40 por ciento de la fuerza de trabajo—, lo que le otorga un puesto en los órganos nacionales de formulación de políticas, incluidos los consejos nacionales de trabajo, formación profesional, pensiones y seguridad en el lugar de trabajo. Hace hincapié en la doble función de la MEF: influir en la forma que tendrá la política nacional y apoyar la viabilidad de las pequeñas empresas y las microempresas, que constituyen la mayor parte de la economía de Malasia. Dada su limitada capacidad, subraya la importancia de adaptar las políticas nacionales a los distintos tamaños de las empresas. Por ejemplo, la MEF abogó con éxito por la aplicación escalonada de nuevas normativas de seguridad en el trabajo para garantizar que las pymes y las microempresas pudieran cumplirlas paulatinamente. También destaca la inversión de la MEF en la formación de competencias a través de su academia especializada, que ayuda a preparar a los trabajadores —especialmente a los graduados que entran en pequeñas empresas— para el crecimiento profesional y la transición en el ecosistema empresarial, desde las microempresas hasta las empresas multinacionales. Subraya el papel de las federaciones nacionales a la hora de expresar las necesidades de las empresas más pequeñas y garantizar que están capacitadas para ofrecer salarios decentes, entornos de trabajo seguros y operaciones sostenibles. Por último, encomia a la OIE por facilitar un valioso aprendizaje entre iguales para sus miembros. Mediante el intercambio de enseñanzas extraídas tanto de los éxitos como de los fracasos, las federaciones como la MEF pueden aplicar enfoques de eficacia probada y conocimientos técnicos para reforzar la aplicación nacional y respaldar el desarrollo económico inclusivo.

La Sra. Grynspan señala el rápido crecimiento del mercado de las finanzas sostenibles —que actualmente asciende a 7 billones de dólares de los Estados Unidos— como el mayor cambio financiero de la historia. Sin embargo, la confianza en el sector disminuyó en 2023, con una caída de los nuevos flujos del 60 por ciento debido a las deficiencias en el cumplimiento y la rendición de cuentas. La oradora pone de relieve la urgente necesidad de restablecer la confianza pública reforzando la transparencia y las normas. Destaca una segunda preocupación: la financiación sostenible no está llegando a los países más vulnerables. A pesar de los grandes fondos mundiales de inversión, solo el 2 por ciento de la IED llega a África. Para redirigir los fondos hacia donde más se necesitan, pide que se reforme la arquitectura financiera internacional a fin de combinar mejor las inversiones públicas y privadas. Para ello sería necesario mejorar los marcos nacionales de inversión, la negociación de contratos y las capacidades de los Gobiernos, las comunidades y las empresas. En cuanto al comercio, la oradora subraya su importancia para el desarrollo, especialmente en las economías pequeñas y vulnerables. Critica los aranceles que perjudican a los países con un impacto mínimo en los déficits comerciales mundiales y señala las desigualdades en las cadenas de valor mundiales: por ejemplo, los productores de café que solo ganan el 0,6 por ciento del valor de un café con leche y la República Democrática del Congo, que no recibe más que el 3 por ciento del valor de sus exportaciones de cobalto. Insta a apoyar el comercio justo, la adición de valor y la

diversificación económica. Por último, reconoce la pertinencia de la promesa de innovaciones financieras como los bonos verdes y los canjes de deuda por medidas de protección ambiental, pero advierte de que son insuficientes si no se aumenta la inversión privada. A tal fin se necesitan herramientas de mitigación de riesgos, garantías y marcos multilaterales más sólidos. La oradora concluye reafirmando que solo una acción colectiva y mundial puede movilizar los recursos necesarios para alcanzar los ODS.

El Sr. Sussman afirma que no existe una contradicción inherente entre el trabajo decente y el crecimiento económico, como demuestran las economías avanzadas que han logrado ambos objetivos. El reto, argumenta, reside en alinear los incentivos a corto plazo —especialmente en el sector privado— con los objetivos de sostenibilidad a largo plazo. Al igual que las personas necesitan cierta disciplina para ahorrar para el futuro, los mercados necesitan una orientación similar para dirigir las finanzas hacia resultados sostenibles. Describe las finanzas como una herramienta neutral pero poderosa que debe ser dirigida por la sociedad para alcanzar los fines correctos. Aunque el cumplimiento de los criterios ASG ha ayudado a establecer normas para «no hacer daño», reconoce la preocupación por el falso ecologismo. Aun así, considera que los criterios ASG son un primer paso necesario, y que la siguiente fase será una inversión que cree un impacto efectivo, especialmente en apoyo del trabajo decente. Subraya que el capital «paciente» es esencial para ampliar la inversión de impacto. Los fondos de pensiones, que gestionan entre 70 y 80 billones de dólares de los Estados Unidos en todo el mundo, representan una gran oportunidad. Desviar incluso una pequeña parte de sus comisiones podría aumentar significativamente la IED en los países de ingresos bajos y medianos bajos. Modestos cambios normativos —como permitir que una pequeña parte de las carteras de pensiones incluya activos no líquidos a largo plazo— podrían desbloquear importantes flujos de financiación. Cita como ejemplo positivo a LeapFrog, empresa de capital riesgo que dirige el capital a causas sostenibles y se adhiere a estrictas normas externas. Sin embargo, señala que estos casos son poco frecuentes. Para concluir, pide más modelos de financiación mixta y ajustes normativos para aumentar el alcance de los logros, con la colaboración de los actores públicos y privados a fin de canalizar el capital hacia donde más se necesita.

El Sr. Szabo destaca la enorme escala y complejidad de la cadena de suministro de Nestlé, que incluye 400 centros de fabricación, 270 000 empleados, 150 000 proveedores e insumos procedentes de entre 5 y 6 millones de explotaciones agrícolas. Todo ello exige un enfoque estructurado y proactivo en cuanto a la diligencia debida en materia de derechos humanos. Explica que el marco interno de Nestlé se centra en identificar y abordar riesgos como el trabajo infantil, el trabajo forzoso, los derechos sobre la tierra y la seguridad de los trabajadores en 14 cadenas de suministro de materias primas en 20 países, en particular el cacao y el café. Para abordar estas cuestiones, describe los planes de acción internos, los programas de base con asociados y las iniciativas de promoción para mejorar los entornos propicios. Hace hincapié en el papel de una gobernanza sólida: la estrategia está respaldada por el consejo de administración y el consejero delegado de Nestlé, con el apoyo de comités interfuncionales y dirigentes locales. Subraya la importancia de las alianzas —con los Gobiernos, la OIT, la OIE y otros actores— a medida que la evolución de la legislación en materia de diligencia debida establece criterios más estrictos. Aunque reconoce los retos actuales, afirma que Nestlé está comprometida con el perfeccionamiento de sus sistemas y la mejora de la repercusión. En cuanto a las pymes, que constituyen la mayoría de los proveedores de Nestlé, el orador recalca la necesidad de implicarlas en la diligencia debida. Nestlé ha incluido cláusulas de derechos humanos en los contratos con los proveedores y les ofrece apoyo personalizado en función de su capacidad. Describe distintas herramientas, como una herramienta de evaluación de la madurez, que permite llevar a cabo autoevaluaciones, y el Human Rights Palm Fund, que ofrece apoyo financiero a los

proveedores de aceite de palma que subsanen deficiencias. Concluye afirmando el firme compromiso de Nestlé de apoyar a las pymes, reconociendo su éxito como parte integrante del de la propia empresa.

Conversación entre los asociados - Economía basada en los derechos humanos[6]

Facilitadores/Introducción

- Sra. Corinne Vargha, Directora, Departamento de Normas Internacionales del Trabajo, OIT
- Sra. Peggy Hicks, Directora, Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH)
- Sr. Marath Baruch Bolaños López, Secretario del Trabajo y Previsión Social, México
- Sra. Christine Nkulikiyinka, Ministra de Función Pública y Trabajo, Rwanda
- Sra. Emiko Nagasawa, Asesora Superior, Federación Empresarial del Japón (Keidanren)
- Sra. Toni Moore, Secretaria General, Unión de Trabajadores de Barbados (BWU)

Moderadora

- Sra. Emmanuelle St-Pierre Guilbault, Funcionaria Superior, Coalición Mundial para la Justicia Social, OIT

Panelistas

- Sr. Giorgio Boccardo Bosoni, Ministro del Trabajo y Previsión Social, Chile
- Sr. Shadrack Mwadime, Secretario Principal, Departamento Estatal de Trabajo y Desarrollo de Competencias, Kenya
- Sr. Georges Mischo, Ministro de Trabajo, Luxemburgo
- Sra. Tanzila Narbaeva, Presidenta del Senado y de la Comisión Nacional de Lucha contra la Trata de Personas y el Trabajo Forzoso, Uzbekistán
- Sra. Adriana Martins, Jefa de la División de Asuntos Sociales, Ministerio de Relaciones Exteriores, Brasil
- Sr. Khelil Ghariani, Miembro de la Comisión Ejecutiva, Unión Tunecina de la Industria, el Comercio y la Artesanía (UTICA)
- Sra. Cristina Faciaben, Directora Internacional, Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CCOO), España
- Sra. Magdalena Sepúlveda, Directora, Instituto de Investigaciones de las Naciones Unidas para el Desarrollo Social (UNRISD)
- Sra. Adriana Quiñones, Jefa de Derechos Humanos y Desarrollo, Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU-Mujeres)
- Sra. Merita Mesiäislehto, Instituto Finlandés de Salud y Bienestar (THL)
- Sr. Santosh Kumar, Director de Legislación, Alianza Cooperativa Internacional

[6] Enlace al vídeo de la sesión: ILO Live - Conversaciones entre socios - Economía de los Derechos Humanos.

La moderadora declara abierta la reunión, da la bienvenida a los participantes y subraya que la conversación entre los asociados sobre la economía basada en los derechos humanos es un paso fundamental para que la Coalición se convierta en una plataforma plenamente operativa. Destaca la determinación de todos los participantes de promover una agenda transformadora fundada en los derechos humanos, la dignidad y el trabajo decente, y explica cómo se desarrollará la reunión, que contará con contribuciones de los coorganizadores, los Gobiernos y diversos asociados de la Coalición.

La Sra. Hicks dice que es un privilegio abrir un debate sobre la construcción de economías que fomenten no solo el crecimiento, sino también la dignidad, la justicia y la igualdad, y afirma que el giro hacia una economía basada en los derechos humanos no puede ser más oportuno. La creciente desigualdad mundial, la precariedad generalizada y el sobreendeudamiento de muchos países de ingresos bajos y medianos son la prueba de que los modelos vigentes no logran preservar los derechos y la seguridad económica de las personas. Efectivamente, millones de personas realizan trabajos mal remunerados e inseguros sin protección social, lo que aviva el malestar social y socava la confianza en las instituciones. Se necesita un nuevo enfoque que incorpore plenamente a las personas y sus derechos en la política económica. La oradora subraya, además, que la economía basada en los derechos humanos se funda en las alianzas, la evidencia y la práctica, y agradece el compromiso de la OIT y de las organizaciones de empleadores y de trabajadores. Describe iniciativas con Gobiernos, la sociedad civil y otros actores para incorporar los derechos humanos —especialmente los derechos económicos y sociales— en las políticas y la planificación. Algunas de las prioridades que abordan esas iniciativas son el acceso universal a los servicios esenciales, una tributación equitativa, el fortalecimiento de las medidas contra la corrupción y el reconocimiento del trabajo del cuidado. Por otro lado, debe exigirse rendición de cuentas a las empresas a través de leyes compatibles con las normas de las Naciones Unidas y la OIT. La oradora aboga por una nueva definición del éxito económico que vaya más allá del producto interno bruto (PIB) y destaca tres prioridades: ayudar a los países a incorporar obligaciones de derechos humanos en las políticas laborales y económicas; contribuir a los debates mundiales sobre políticas, especialmente con las instituciones financieras, y proporcionar herramientas para integrar los derechos en los presupuestos y la planificación. La economía basada en los derechos humanos está en marcha: hay proyectos en curso en Kenya, Chile, República de Moldova, Honduras, Rwanda y Etiopía, implementados en colaboración con Gobiernos y otras entidades. Por último, la oradora destaca la necesidad imperiosa de una reforma financiera mundial e insta a todas las partes interesadas a aunar esfuerzos para ampliar las prácticas promisorias a través de la Coalición Mundial para la Justicia Social y su centro de conocimientos, que se pondrá en marcha próximamente. La construcción de una economía equitativa requerirá acciones conjuntas para que los derechos humanos y laborales ocupen un lugar central en la formulación de políticas.

La Sra. Vargha destaca que las normas internacionales del trabajo son la contribución fundamental de la OIT al derecho internacional de los derechos humanos, la promoción de la justicia social y el fortalecimiento de la democracia. Se remite a la Memoria del Director General de la OIT presentada en la Conferencia Internacional del Trabajo y resalta la imperiosa necesidad de reforzar la gobernanza en sus aspectos político, social y económico. Tras cuestionar el planteo recurrente de que la democracia entorpece el crecimiento económico, señala que existen pruebas de que los sistemas democráticos fomentan la estabilidad y la prosperidad a largo plazo. La democracia impulsa el progreso económico empoderando a los grupos marginados, fomentando la rendición de cuentas y creando instituciones que promueven la igualdad, la productividad y las oportunidades, lo que demuestra que las libertades y el desarrollo económico se refuerzan mutuamente. La democracia también

fortalece la paz social y la estabilidad económica, pues propicia la existencia de organizaciones de empleadores y de trabajadores independientes. Esas estructuras democráticas promueven la rendición de cuentas, reducen la polarización y apuntalan el crecimiento a largo plazo mediante el diálogo y la cooperación. Las empresas, por su parte, se benefician del estado de derecho, la transparencia y los bienes públicos que ofrece la democracia. La Memoria del Director General es un recordatorio oportuno de la misión que mancomuna a los asociados de la Coalición: empoderar a las personas, preservar su dignidad frente a las consecuencias negativas de las prácticas económicas, y hacerlo no solo porque es un imperativo moral, sino también porque es una forma de dar una oportunidad a la paz en este mundo fracturado, que es el motivo por el cual se creó la OIT y el objetivo que se pretende alcanzar mediante la iniciativa sobre la economía basada en los derechos humanos. La OIT ve esta iniciativa como una oportunidad clave para hacer frente a la desigualdad y los retos mundiales, así como de imaginar una realidad en la que las personas y el planeta prosperen, las economías se desarrollen y la paz sea posible.

La Sra. Nagasawa, en representación de la OIE, felicita a la OIT y al ACNUDH por el lanzamiento de la iniciativa sobre la economía basada en los derechos humanos. En calidad de coorganizadora, la OIE participará en la elaboración conjunta del programa de trabajo e identificará las esferas en las que su colaboración pueda producir los mayores beneficios a nivel local. La OIE representa a más de 50 millones de empresas a través de 150 federaciones de empleadores y lleva la voz de las empresas del Norte Global y el Sur Global a los debates internacionales. La oradora hace hincapié en que la promoción y el respeto de los derechos humanos no son un mero objetivo en materia de políticas, sino una prioridad fundacional de la OIE, que está íntimamente relacionada con el crecimiento inclusivo y la sostenibilidad de las empresas. Una economía basada en los derechos humanos requiere dos pilares esenciales que se refuerzan mutuamente: por un lado, un marco sólido de derechos humanos fundado en una buena gobernanza, instituciones eficaces y el estado de derecho; y, por otro, una base económica robusta, que reconozca que los trabajos, las empresas y las oportunidades económicas son fundamentales para el ejercicio de los derechos humanos. La oradora insta a los Gobiernos a cumplir sus compromisos internacionales y abordar las causas estructurales de los déficits de trabajo decente, como las altas tasas de informalidad. Subraya que las empresas no pueden resolver esos retos sistémicos por sí solas y aboga por un enfoque colaborativo fundado en el respeto mutuo. A nivel mundial, alienta la coordinación entre la OIT, el ACNUDH, la OIE y otras entidades, a fin de reducir la informalidad, mejorar la seguridad jurídica y fomentar entornos propicios para las empresas. A nivel local, aboga por la apropiación de las soluciones por parte de los países y una mayor cooperación entre las organizaciones internacionales y las federaciones que integran la OIE. El diálogo social es fundamental para generar confianza y formular, de manera conjunta, políticas que sean respetuosas de los derechos y económicamente sólidas. La oradora reafirma la determinación de la OIT de contribuir activamente a la Coalición y colaborar de manera constructiva con miras a obtener resultados duraderos.

La Sra. Moore hace hincapié en que, para los trabajadores, la economía basada en los derechos humanos no es incompatible con el crecimiento económico; sin embargo, insiste en que el crecimiento debe fijarse una tasa, pero también una dirección. En vez de tener en cuenta únicamente la extracción de valor, se ha de dar prioridad a la manera en que los mercados crean valor mediante el acceso a los derechos, como servicios públicos de calidad, protección social, trabajo decente, salarios dignos y un equilibrio entre el bienestar social, económico y ambiental. Bajo la consigna de que «Barbados es más que una economía: es una sociedad» —frase que se atribuye a un ex primer ministro—, los interlocutores sociales han desarrollado una economía de misión que integra los derechos humanos junto con el desarrollo económico

en su visión para 2030. El PIB es un indicador inadecuado para medir el progreso porque no tiene en cuenta el bienestar, la igualdad y la equidad. El crecimiento económico sin acceso al empleo, a la atención médica o a la educación genera frustración y desconfianza, tanto en las instituciones nacionales como en los sistemas internacionales. El PIB tampoco tiene en cuenta las vulnerabilidades o la fragilidad ambiental de los países, motivo por el cual Barbados y otros han reclamado una reforma económica mundial, por ejemplo, a través de la iniciativa de Bridgetown, que aboga por una distribución más equitativa de los recursos, un mayor apoyo para los países en desarrollo y una mejor protección contra las perturbaciones. Barbados colabora con la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo y con la CSI en la promoción de la iniciativa «Más allá del PIB» y los ODS. Los trabajadores participan activamente en la Coalición y las discusiones de la OIT, a través de actividades de promoción y de otra índole para el reconocimiento y el ejercicio efectivo de los derechos, lo que constituye una de sus principales contribuciones. Por último, la oradora pide que las decisiones fiscales, monetarias y económicas se funden en obligaciones vinculantes en materia de derechos humanos y subraya la urgencia de poner en marcha una economía que se base verdaderamente en los derechos humanos.

El Sr. Bolaños López destaca que el modelo de desarrollo de México se basa en la dignidad, la igualdad y la justicia social, y forma parte de la llamada «cuarta transformación» del país. Con esta transformación, se aspira a impulsar un desarrollo sostenible integral, articulando el crecimiento económico y el bienestar social para promover los derechos humanos. El orador afirma que el objetivo del «Plan México» es la creación de 1,5 millones de empleos para fomentar una prosperidad compartida. Esa iniciativa se centra en tres ejes—economía moral, bienestar social y sustentabilidad— y prioriza el apoyo a grupos marginados, en particular las comunidades rurales, los pueblos indígenas, las mujeres y los jóvenes. El Gobierno procura garantizar los derechos fundamentales, como los derechos a la salud, la vivienda y la educación, en particular para los más vulnerables, lo que constituye una importante contribución a la agenda de los derechos humanos. El orador precisa que 11 millones de personas salieron de la pobreza entre 2019 y 2024, el 80 por ciento de ellas gracias a la política laboral. Destaca que el salario mínimo aumentó un 132 por ciento en términos reales, sin que se disparen la inflación o el desempleo, y que el objetivo es cubrir 2,5 canastas básicas. También menciona una serie de importantes reformas laborales, en particular, la prohibición de la subcontratación abusiva y la introducción de protecciones para los trabajadores de plataformas. La población ocupada ha registrado un aumento del 12 por ciento, con un 60 por ciento de empleos en el sector formal. El orador se refiere al programa «Jóvenes Construyendo el Futuro», por el que el Gobierno ofrece formación remunerada y seguridad social a los jóvenes, un 60 por ciento de los cuales logran incorporarse al sector formal. Las reformas previsionales han permitido alcanzar una tasa de reemplazo del 100 por ciento del salario en el momento de la jubilación. Estas medidas reflejan la determinación de México de construir una sociedad más justa y una economía respetuosa de los derechos humanos. El orador concluye reafirmando la convicción de México de que la justicia social es fundamental para la paz y la economía debe estar al servicio del bienestar colectivo.

La Sra. Nkulikiyinka reafirma la determinación de Rwanda de colocar los derechos humanos, la dignidad y la justicia social en el centro de la transformación económica y destaca que esos principios son una parte integral de la estrategia de desarrollo nacional de su país. A través de la «Visión 2050» y la segunda Estrategia Nacional de Transformación, Rwanda tiene el objetivo de crear 1,25 millones de empleos decentes de aquí a 2029, prestando especial atención a los jóvenes, las mujeres y las personas con discapacidad. La oradora subraya que el crecimiento económico sin derechos ni protecciones profundiza la desigualdad, por lo que las políticas de Rwanda dan prioridad a un enfoque de la justicia económica que pone a los

ciudadanos en primer lugar. Para hacer frente al aumento del trabajo informal y en plataformas, Rwanda ha reforzado su colaboración con la OIT y el ACNUDH, lo que ha dado lugar a un plan de acción conjunto destinado a mejorar las protecciones legales, la seguridad social y la rendición de cuentas. Estos esfuerzos ya están orientando la planificación nacional; por ejemplo, en el marco del ejercicio presupuestario de 2025-2026, se pidió a cada institución que presentara sus metas de creación de empleo. La oradora plantea que la participación del sector privado es clave para que la economía basada en los derechos humanos se haga realidad, y señala que Rwanda colabora con las empresas para que sus actividades se ajusten a las normas laborales y de derechos humanos. El sistema nacional de protección social está ampliando su cobertura, en particular para incluir a los trabajadores de la economía informal. Otras iniciativas son la simplificación del régimen tributario y subvenciones a las mipymes dirigidas por jóvenes y mujeres. La oradora destaca los esfuerzos de Rwanda por promover la igualdad de género y la inclusión de las personas con discapacidad, en particular, mediante la adopción de políticas específicas y el fomento de la accesibilidad en los lugares de trabajo. Dice que la economía basada en los derechos humanos es una guía práctica que demuestra que los derechos y el crecimiento se refuerzan mutuamente. Rwanda ha registrado un crecimiento medio del PIB del 7,5 por ciento durante el último decenio, ha reducido la pobreza en 12 puntos porcentuales y ha creado 1,7 millones de empleos, ocupados en su mayoría por jóvenes. Por último, la oradora reafirma la voluntad de Rwanda de colaborar con la comunidad internacional y contribuir a la iniciativa con su experiencia, que demuestra que es posible lograr un crecimiento inclusivo y basado en derechos, incluso con recursos limitados.

La Sra. Narbaeva manifiesta su firme apoyo a la iniciativa sobre la economía basada en los derechos humanos, que sitúa la dignidad, la igualdad y la justicia social en el centro de la gobernanza económica. Sostiene la visión de que las políticas económicas y sociales han de estar al servicio de las personas y reafirma la determinación de Uzbekistán de promover un desarrollo sostenible e inclusivo mediante su programa de reformas, Uzbekistán 2030. Expone cuatro objetivos nacionales: lograr la categoría de país de ingresos medianos altos sobre la base de la igualdad y la dignidad; armonizar los sistemas de educación, salud y protección social con las normas internacionales; garantizar la sostenibilidad ambiental, y construir un Estado justo y moderno al servicio del pueblo. Las principales prioridades de su país, en particular la lucha contra la corrupción, una gobernanza centrada en las personas y la protección del medioambiente, concuerdan con la economía basada en los derechos humanos. La oradora destaca diversos logros recientes en materia de derechos laborales, entre ellos la plena ratificación de los convenios de la OIT, reformas constitucionales y jurídicas, y el aumento de protecciones para las mujeres, los jóvenes y los grupos vulnerables. Con el apoyo de la OIT, Uzbekistán está poniendo en práctica una estrategia nacional para ampliar la cobertura de la seguridad social, reforzar los servicios y articular la protección social con las políticas del mercado de trabajo. La oradora también aboga por políticas que den prioridad a la economía del cuidado, la educación y el empleo juvenil. Señala que las reformas económicas y los derechos humanos se refuerzan mutuamente y destaca el valor de las herramientas de la Coalición para los países que procuran promover un desarrollo justo e inclusivo. Por último, reafirma la voluntad de Uzbekistán de contribuir, aprender y cooperar, y pide que todas las reformas tengan en cuenta los derechos humanos y los intereses de las personas.

El Sr. Mischo subraya que, en el contexto actual de tensiones geopolíticas y crisis simultáneas, los Gobiernos deben hacer frente a una incertidumbre cada vez más acentuada reafirmando los valores democráticos y construyendo un futuro más justo, inclusivo y sostenible. Impugna la falsa dicotomía entre economía y derechos humanos, aduciendo que los derechos económicos y sociales —como el acceso a la educación, la vivienda, la atención médica y la protección social— deben orientar el modo en que se organizan las economías.

Expresa la firme determinación de Luxemburgo de cumplir la Agenda 2030 y los ODS y subraya que la economía social y sus diversos actores son decisivos para promover la justicia, la sostenibilidad y la inclusión. Observa que los emprendedores sociales fomentan el empleo entre los grupos marginados, ofrecen soluciones asequibles en servicios esenciales y contribuyen a reducir todas las formas de discriminación al tiempo que promueven la responsabilidad ambiental. En el marco de los preparativos de la Segunda Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social que tendrá lugar en 2025 y como contribución concreta a la agenda de la justicia social y los derechos humanos, Luxemburgo tuvo la iniciativa de organizar la primera Cumbre de Gobiernos sobre Innovación Social. El evento, celebrado en abril, reunió a representantes de unos 50 países, organizaciones multilaterales y partes interesadas del sector privado, quienes analizaron marcos jurídicos y estratégicos, mecanismos de financiación, métodos para medir efectos y alianzas que pueden reforzar el papel de la innovación social a nivel internacional. La Cumbre concluyó con la adopción de la Declaración de Luxemburgo, que establece prioridades comunes para integrar la innovación social en las políticas públicas y las medidas multilaterales. El orador señala que 17 países han refrendado la Declaración y alienta a otros a hacer lo propio con el fin de promover una economía basada en los derechos humanos.

El Sr. Bosoni hace hincapié en que el mundo del trabajo atraviesa transformaciones profundas impulsadas por el cambio tecnológico rápido, la crisis climática, las transiciones demográficas y las tensiones geopolíticas. Estos cambios conllevan graves riesgos de que aumente la desigualdad, pero también ofrecen nuevas oportunidades, siempre que se aborden mediante políticas eficaces y diálogo social. El orador reafirma el compromiso de Chile con la agenda de la justicia social del Director General de la OIT y pone de relieve los esfuerzos realizados por el país para construir un modelo de desarrollo centrado en el trabajo decente. Describe cómo, a través del diálogo social y el tripartismo, Chile ha emprendido reformas laborales muy esperadas que tienen por objeto aumentar los ingresos, reducir las horas de trabajo y favorecer el empoderamiento económico de las mujeres. También destaca la política de su Gobierno relativa a cuidados y conciliación de la vida laboral y personal, que promueve la corresponsabilidad mediante el reconocimiento, la redistribución y la reducción del trabajo de cuidado no remunerado, un paso esencial hacia la integración de más mujeres en la fuerza de trabajo y el fortalecimiento de la democracia. Destaca que las políticas de género no están separadas de los programas en materia laboral, sino que están muy interrelacionadas con ellos, como parte de una visión más amplia de la justicia social. Pide un nuevo modelo de desarrollo basado en la inclusión, los derechos humanos y el trabajo decente. Reafirmando el compromiso de Chile con la promoción de una economía basada en los derechos humanos, ve la Segunda Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social como una oportunidad para seguir cooperando a nivel mundial con el fin de configurar un futuro del trabajo justo y democrático, esfuerzo al que su país contribuirá.

El Sr. Mwadime, representando a Kenya como asociado a cargo de la coordinación, destaca el celebrado logro de la Coalición: la transformación de la justicia social de un principio a una acción colectiva. Seguidamente, subraya la importancia de la economía basada en los derechos humanos como herramienta esencial para la integración de los derechos humanos y laborales en las políticas económicas y sociales. Hace hincapié en que los derechos humanos son derechos universales y en que los derechos laborales defienden la dignidad y la equidad en el lugar de trabajo, ambos esenciales para construir sociedades justas y resilientes. Si bien se han realizado progresos, reconoce que persisten varios retos, como la explotación laboral, las condiciones de trabajo inseguras y la exclusión de grupos vulnerables de la protección. Citando la Constitución de Kenya y sus firmes disposiciones sobre los derechos humanos, señala la reforma de la legislación laboral que se está llevando a cabo y el papel que

desempeña Kenya como país pionero de la Alianza 8.7, con una hoja de ruta nacional para eliminar el trabajo infantil y los abusos conexos que orienta la contribución de Kenya. El orador concluye con un llamamiento para que prosiga la colaboración con miras a convertir los ideales comunes en progresos tangibles.

La Sra. Martins indica que el Brasil se siente orgulloso de ser coorganizador de la Coalición y reafirma el compromiso del país de situar la dignidad y la justicia en el centro de las decisiones económicas. Haciendo hincapié en que el PIB no debería ser el único indicador para medir el progreso, acoge con satisfacción el establecimiento del grupo de expertos de alto nivel del Secretario General de las Naciones Unidas sobre los nuevos indicadores y subraya la necesidad de redefinir el concepto de éxito, ambición compartida plenamente por el Brasil. Destaca la atención prestada por el Presidente Lula a la justicia social y señala que el Brasil otorga prioridad en su presidencia del G20 al crecimiento inclusivo, el derecho a la nutrición y la lucha contra la pobreza y el hambre, que constituyen contribuciones importantes al programa de la economía de los derechos humanos. Hace hincapié en la importancia de contar con políticas ambiciosas en respuesta a los cambios en el mundo del trabajo, que promuevan la sostenibilidad por medio de programas sociales, producción artesana y economías locales. Para concluir, cita al ex-Presidente Mujica para subrayar la necesidad de que las decisiones económicas estén orientadas por el respeto de la vida, la libertad y la paz.

La Sra. Faciaben recuerda que el sindicato CCOO fue uno de los primeros sindicatos que se sumó a la Coalición, lo que refleja su firme convicción en el multilateralismo y en el modelo tripartito de la OIT, para el que el diálogo social ocupa un lugar central y el mundo del trabajo es fundamental para lograr la justicia social. Destaca que los sindicatos son actores clave para la construcción de una economía basada en los derechos humanos que promueva la equidad, la redistribución de la riqueza y el bienestar de las personas y rechace el tratamiento del trabajo como una mercancía. Sostiene que una economía basada verdaderamente en los derechos humanos debe dar al trabajo decente un lugar central; no se trata solo del acceso a un empleo, sino del trabajo con una remuneración justa, seguridad, protección social y libertad sindical, incluido el derecho de huelga. Indica que España demuestra que el crecimiento económico y los derechos de los trabajadores son compatibles cuando se sustentan en el diálogo social. Hace hincapié en que los derechos y las normas ambientales solo pueden garantizarse en las cadenas mundiales de suministro mediante la participación de los sindicatos. Concluye afirmando que los trabajadores sindicados están dispuestos a transformar la economía y ayudar a crear sociedades más equitativas y democráticas, contribuyendo activamente al ejercicio de los derechos humanos y los derechos laborales conexos.

El Sr. Ghariani considera que el tema de la economía basada en los derechos humanos reviste suma importancia. Hace hincapié en que el trabajo decente productivo —tal como lo definen las Naciones Unidas y la OIT— es esencial para la realización de esos derechos y que las empresas, como motor de la creación de empleo, dependen de un entorno propicio configurado por políticas públicas eficaces en materia de transporte, infraestructura y sistemas de protección social, entre otros ámbitos. La consecución de los derechos relacionados con el trabajo no solo depende de la productividad de las empresas, sino también de las medidas que adopten los Estados, como políticas salariales que reflejen tanto el crecimiento económico como la inflación. Pide un nuevo contrato social mundial basado en la confianza —especialmente importante para los países del Sur Global— y elaborado mediante reformas del sector público que restauren la confianza entre la ciudadanía, las administraciones y las empresas. Asimismo, subraya la importancia de reconocer el valor del trabajo como contribución convertible y medible al bienestar de la sociedad, y establece una

relación con metas más amplias como la educación, la vivienda y la movilidad social. Concluye diciendo que, para que se materialicen estas ambiciones, es indispensable contar con políticas sociales y económicas sólidas y hacer un uso eficaz de los recursos públicos.

La Sra. Sepúlveda destaca la urgencia de adoptar una economía basada en los derechos humanos en un contexto de crisis globales marcadas por el aumento de la desigualdad, el crecimiento de la pobreza, el incremento pronunciado de la deuda y el incumplimiento de las metas en materia climática. Argumenta que las estructuras económicas actuales están fracasando y que es erróneo pensar que el crecimiento por sí solo es una solución. Dice que la desconexión entre la formulación de políticas económicas y los derechos humanos no es inevitable, sino la consecuencia de decisiones políticas deliberadas. En cambio, en una economía basada en los derechos humanos, todas las decisiones económicas, fiscales y de inversión se centran en las personas y el planeta y se basan en las obligaciones de los Estados en materia de derechos humanos. Como contribución, define cinco principios clave que configuran este modelo y orientan la labor de su instituto: invertir en desarrollo humano, hacer frente a la desigualdad, promover una economía justa y sostenible, apoyar modelos alternativos como la economía social y solidaria, e ir más allá del PIB para centrarse en la dignidad y el bienestar. Asimismo, comparte recomendaciones de política pertinentes para la Segunda Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social, especialmente sobre protección social universal, salarios justos, acceso a servicios públicos esenciales y desarrollo sostenible. Concluye que una economía basada en los derechos humanos no es solo una alternativa, es un camino necesario hacia un futuro más inclusivo, resiliente y justo.

La Sra. Quiñones pone de relieve que hace tiempo que los economistas feministas y los defensores de la igualdad de género abogan por la integración de los derechos humanos en los sistemas económicos. Sin embargo, los modelos económicos dominantes a menudo no han defendido la dignidad y la igualdad de género, sino que han reforzado la exclusión, la desigualdad y las prácticas no sostenibles. Pide un cambio de paradigma a una economía basada en la igualdad de género y obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, que proporcionan herramientas poderosas para la promoción, la reforma y el desarrollo inclusivo. Hace hincapié en la importancia de la igualdad sustantiva, lo que implica no solo el reconocimiento jurídico, sino también la redistribución real de los recursos a través de políticas basadas en los derechos. Los Estados deben armonizar la legislación, los presupuestos y las políticas con sus obligaciones en materia de derechos humanos, en particular el uso de una presupuestación con perspectiva de género y de políticas fiscales e industriales anticíclicas para fomentar el crecimiento equitativo en cuanto al género. No hacerlo es, sin duda, una mala política, pero también es una violación de los derechos. Pone de relieve el liderazgo de ONU-Mujeres en el enfoque de la igualdad de género desde la perspectiva de los derechos humanos y cita el Compromiso de Buenos Aires adoptado en 2022 como una hoja de ruta de referencia para el cuidado como un bien público y el desarrollo con perspectiva de género. Concluye reafirmando el firme compromiso de ONU-Mujeres con la Coalición Mundial para la Justicia Social y su contribución a ella sobre la base de sus alianzas con la OIT y el ACNUDH a través de la Coalición Internacional para la Igualdad Salarial (EPIC) y el Acelerador mundial.

La Sra. Mesiäislehto reitera el apoyo firme de Finlandia a la Coalición y señala que la economía basada en los derechos humanos concuerda estrechamente con el enfoque de la economía del bienestar de Finlandia. Este modelo, concebido por el Instituto Finlandés de Salud y Bienestar, integra la justicia social y la sostenibilidad ecológica en la formulación de políticas económicas, y va más allá del PIB para centrarse en la salud, la educación, el trabajo decente, la igualdad de género y la justicia intergeneracional, por lo que representa una

contribución interesante a la economía de los derechos humanos. Describe algunas iniciativas emprendidas en su país para poner en marcha este modelo, que incluye un marco de gobernanza para la toma de decisiones sostenible, nuevos indicadores del bienestar y una formulación participativa de los presupuestos en el plano municipal. Estas herramientas sirven para guiar la elaboración de políticas justas, inclusivas y orientadas al futuro. Destaca que la economía basada en los derechos humanos refuerza esta labor plasmándola en compromisos jurídicos. Finlandia está dispuesta a contribuir a las actividades y los debates mundiales de la Coalición, especialmente en la próxima Cumbre Social Mundial.

El Sr. Kumar expresa su firme apoyo a la iniciativa relativa a la economía basada en los derechos humanos, una iniciativa orientada a la acción, con aspiraciones y muy necesaria. Hablando en nombre de la Alianza Cooperativa Internacional y la economía social y solidaria en general, subraya que es esencial la transición de un modelo centrado en la obtención de máximos beneficios a una economía basada en los derechos humanos para abordar la desigualdad, la exclusión y la degradación ambiental. Recuerda el llamamiento para una transición posterior al crecimiento efectuado por el Relator Especial de las Naciones Unidas, que identifica la economía social y solidaria como un medio fundamental para esa transformación. El orador indica que los valores de la economía social y solidaria están arraigados en el patrimonio cultural de la humanidad y hace hincapié en el reconocimiento reciente por la OIT y las Naciones Unidas de la función de la economía social y solidaria en la promoción del trabajo decente, la justicia social, la sostenibilidad y los derechos humanos. Con motivo del Año Internacional de las Cooperativas de las Naciones Unidas en 2025, insta a los Gobiernos a facilitar e invertir en iniciativas de la economía social y solidarias, en particular el trabajo de cuidados, la transición de la economía informal a la economía formal, las transiciones ecológicas y la inclusión digital. Para concluir, destaca la importancia de mantener las alianzas y reafirma el compromiso de la Alianza Cooperativa Internacional de promover la justicia social y la construcción de una economía basada en los derechos humanos que logre una paz duradera, así como de contribuir activamente a la iniciativa.

Diálogo temático interactivo - Liderando el cambio: IA para el impacto social

Coorganizadores

- Sra. Celeste Drake, Directora General Adjunta, OIT
- Sr. Bilel Jamoussi, Director Adjunto y Jefe del Departamento de Comisiones de Estudio y Políticas de la Oficina de Normalización de las Telecomunicaciones, Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT)

Panelistas

- Sr. Younes Sekkouri, Ministro de Inclusión Económica, Pequeñas Empresas, Empleo y Competencias, Marruecos
- Sra. Anousheh Karvar, representante del Gobierno de Francia ante la OIT
- Sr. Arne Franke, Director de la Confederación de Asociaciones de Empleadores de Alemania (BDA)
- Sr. Jesse Wilderman, Director, UNI Global Union
- Sr. Nicolás Ratto, Ministerio del Trabajo y Previsión Social, Chile
- Sr. Maximilian Schneider, Ministerio Federal de Trabajo y Asuntos Sociales, Alemania
- Sr. Marek Troszyński, Instituto Nacional de Investigación de Polonia (NASK)
- Sr. Oliver Röpke, Presidente del Comité Económico y Social Europeo (CESE)
- Sr. Javier Elkin, Coordinador de Salud Digital, Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (CICR)

El diálogo temático congrega a más de 50 participantes para examinar la manera de encauzar la IA en favor de la justicia social y el trabajo decente, prestando especial atención a la necesidad de promover la responsabilidad colectiva, los marcos éticos y la innovación inclusiva.

La Sra. Drake da inicio al diálogo interactivo subrayando que, si bien persisten preocupaciones por la pérdida de puestos de trabajo, es más probable que la IA reestructure las tareas y no que elimine funciones. Insta a centrar la atención más bien en la calidad del empleo y en la inclusión, y exhorta a la generación continua de datos, la adaptación de las políticas y la colaboración entre los Gobiernos, los trabajadores y los empleadores.

El Sr. Jamoussi destaca la función que cumplen las normas técnicas mundiales en la creación de una IA fiable y segura. Señala que, para lograr un progreso inclusivo, se debe dotar a todas las partes interesadas —desde los organismos de regulación hasta los trabajadores de primera línea— de las competencias necesarias para participar de manera significativa en el desarrollo y la gobernanza de la IA.

La Sra. Karvar presenta uno de los resultados obtenidos gracias a la intervención crucial de la Coalición en el ámbito de la IA para el impacto social, a saber, la red de observatorios sobre IA y trabajo, una nueva plataforma multilateral para armonizar la labor de investigación, compartir datos y coordinar políticas entre jurisdicciones, e invita a una participación más amplia.

El Sr. Sekkouri destaca el cambio que la IA ha impulsado en la organización de la vida y el trabajo. Prevé un aumento del empleo por cuenta propia y de las iniciativas empresariales ágiles, y hace un llamamiento en pro de la flexibilidad legislativa y la gobernanza mundial a fin de que la IA beneficie a las economías en desarrollo y apoye a los trabajadores jóvenes.

Durante la sesión, tres grupos temáticos dirigidos por expertos examinan varias esferas prioritarias. En la mesa sobre soluciones de IA, participan **los Sres. Schneider**, **Ratto** y **Elkin**, quienes presentan casos de uso de la IA en la gestión de la fuerza de trabajo y los servicios del empleo, como parte de su contribución a la Coalición. Entre las principales conclusiones, cabe destacar la necesidad de una mejor infraestructura de aprendizaje entre pares y de mejores salvaguardas para los flujos transfronterizos de datos a fin de evitar lagunas normativas. El grupo sobre diálogo social, presentado por **los Sres. Franke**, **Wilderman** y **Röpke**, se centra en la gestión algorítmica y en la necesidad de fortalecer los mecanismos de negociación colectiva en los contextos digitales. Se pone de relieve la urgencia de la transparencia y la protección de los trabajadores, sobre todo en las cadenas de suministro. En la discusión sobre pruebas e impacto, presentada por **el Sr. Troszyński** y **la Sra. Trino**, se presta especial atención a las deficiencias que existen en materia de comparabilidad de los datos transnacionales y se proponen programas experimentales, como la IA en la educación o la IA para todos, a fin de promover la inclusión y la concepción iterativa de políticas.

A lo largo de las discusiones, los participantes abogan por una coordinación mundial con respecto a la responsabilidad jurídica, por canales de intercambio de conocimientos más sólidos y por inversiones en el desarrollo de capacidades para una IA inclusiva. La sesión finaliza con un compromiso conjunto de velar por que la IA impulse un desarrollo equitativo, basado en el diálogo social y la gobernanza ética.

Clausura oficial[7]

- Alocución del Sr. Gilbert F. Houngbo, Director General de la OIT, Copresidente del Grupo de Coordinación
- Alocución del Sr. Luiz Marinho, Ministro de Trabajo del Brasil, Copresidente del Grupo de Coordinación

El Presidente de la Conferencia expresa su agradecimiento por la riqueza de los diálogos temáticos mantenidos a lo largo de la sesión y da paso a las observaciones finales de los principales líderes. También agradece la implicación de todos los participantes, que ha permitido una clausura del evento unificada y orientada al futuro.

El Sr. Houngbo elogia la amplia participación y la energía vibrante que pudieron observarse durante todo el Foro, las cuales demuestran el creciente compromiso mundial con la justicia social. Subraya la función única que desempeña la Coalición como plataforma unificadora y orientada a la acción que congrega a asociados de todos los sectores y regiones. En referencia a varios ejemplos nacionales —desde las reformas institucionales de Chile hasta los compromisos de Malta y Chipre—, destaca la función central de la Coalición como espacio para el aprendizaje colectivo, y agradece al Grupo de Coordinación su liderazgo para amplificar y armonizar las medidas adoptadas por los asociados. Subraya que el principal desafío consiste en obtener resultados concretos sobre el terreno. Reafirma que la lucha contra la desigualdad y la ampliación del acceso universal a las oportunidades deben trascender de la esfera política y seguir ocupando un lugar central en las estrategias de crecimiento sostenible. Para concluir, señala que la Coalición es una herramienta indispensable para transformar el conocimiento en acciones a fin de construir sociedades más justas e inclusivas.

El Sr. Marinho formula sus observaciones finales y expresa su gratitud y optimismo. Elogia la función de la Coalición como movimiento dinámico y diverso que ha permitido movilizar a más de 370 asociados en torno a un conjunto de prioridades comunes. Reafirma la visión del Presidente Lula de que el liderazgo colectivo es fundamental para lograr la transformación social y subraya que el Foro pone de manifiesto el poder de la cooperación, tanto para el diálogo social como para la reforma económica centrada en las personas. De cara al futuro, el orador manifiesta su compromiso de fortalecer la armonización de las políticas relativas a las 14 intervenciones principales de la Coalición y exhorta a aumentar la coherencia y eficacia de las contribuciones de los asociados. Pone de relieve dos acontecimientos importantes que tendrán lugar próximamente, a saber, la Segunda Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social, 2025 en Qatar y el 30.º periodo de sesiones de la COP30 en el Brasil. Cursa una invitación formal a participar en este último evento, que ofrece una oportunidad única para integrar la sostenibilidad ambiental en el trabajo decente, la protección social y la inclusión productiva. Para concluir, resalta la importancia de la distribución equitativa de la riqueza y la promoción de la democracia como pilares de un desarrollo justo e inclusivo.

[7] Enlace al vídeo de la sesión: ILO Live - Sesión de clausura del Foro anual.